

Julio 24 de 1940

19ª REUNION — 15ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **ROBUSTIANO PATRON COSTAS**,
Presidente provisional del Senado

Ministro presente: de Agricultura, doctor Cosme Massini Ezcurra.

Senadores presentes: Mario Arenas, Herminio Arrieta, Raúl Ceballos Reyes, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios Robustiano Patrón Costas, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, José P. Tamborini.

Senadores ausentes, con aviso: Juan José Lubary, Jorge J. Pinto, Matías G. Sánchez Sorondo, Juan R. Vidal, Benjamin Villafañe.

Senadores ausentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Ricardo Caballero, Aldo Cantoni, Juan B. Castro, Juan Cepeda, Atanasio Eguiguren, Guillermo Rothe.

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, remitiendo el proyecto de ley, por el que se le autoriza a invertir hasta la suma de \$ 100.000 moneda nacional, en los trabajos de la extinción de la vizcacha en la provincia de Tucumán.

II.—Comunicación oficial.

III.—Peticiones.

2.—Continúa la consideración en particular del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, en el proyecto de ley, en revisión, sobre colonización. Queda en suspenso.

—En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio de 1940, siendo la hora 16 y 5, dice el

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda abierta la sesión.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

—Se lee:

Buenos Aires, julio 22 de 1940.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Entre las plagas que afectan permanentemente los intereses agropecuarios, la de la vizcacha viene asumiendo caracteres cada vez más alarmantes, y en la actualidad constituye un serio problema, por los ingentes daños que ocasiona a los campos de pastoreo.

En estos momentos, precisamente, el mal ha recrudecido en forma extraordinaria en la provincia de Tucumán, y tal es el desarrollo que ha adquirido en algunos departamentos, que representa un verdadero problema de carácter económico-social.

2

COLONIZACION

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Al orden del día.

Continúa la discusión en particular en el proyecto de ley sobre colonización.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º del despacho de la comisión y, si fuera rechazado, se votaría entonces la modificación propuesta por el señor senador por Jujuy.

—Se lee:

Artículo 6º — No podrán ser miembros del Consejo Agrario Nacional:

- a) Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado, y los miembros del directorio del Banco de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, en representación de éstos;
- b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales;
- c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodones o industrias análogas y de empresas colonizadoras;
- d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

Para pedir que el inciso a) se vote por partes: 1º hasta la palabra «profesorado» inclusive; y después el párrafo por el cual se autoriza a los miembros de los directorios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, a formar parte, simultáneamente, del Consejo Agrario Nacional, autorización que yo he observado y solicitado no sea acordada.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que convendría votar el artículo tal cual ha sido despachado por la comisión, porque de otro modo se crearía una inhabilidad a los directores del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional para formar parte del Consejo Agrario Nacional, en el cual la presencia de los mismos puede ser muy útil.

Es evidente que, si por el artículo 3º de la ley, se le da representación conjunta a ambos bancos, no habría que establecer limitaciones en cuanto a la persona que estos directorios convengan nombrar para que los represente, estableciendo una incapacidad, cuando esa persona

designada fuera uno de los directores. Yo creo que los bancos estarían mejor representados y su representante tendría más autoridad si fuera uno de los directores y no un funcionario importante de los mismos o un empleado secundario.

Por eso, pediría a mi distinguido colega, el señor senador por Jujuy, que no insistiera en este punto de vista, para no crear inhabilidades que no deben estar ni en el espíritu ni en la letra de la ley y que tal vez no sean convenientes.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La comisión, al introducir esta modificación a la sanción de Diputados, ha tenido puntos de vista similares a los que acaba de exponer el señor senador por Córdoba. Ha estado muy lejos de su espíritu el propósito de crear sinecuras o canongías. Ha creído, sí, que los bancos oficiales, de la Nación o Hipotecario Nacional, podían creer conveniente confiar su representación en el seno del Consejo Agrario Nacional a uno de sus directores y que si los bancos lo creen así, nadie podría hacer con más acierto ni más adecuadamente que ellos la designación de su propio representante.

Por lo demás, es sabido que los directorios de esos bancos trabajan en forma que les permitiría ejercer esos cargos en el Consejo Agrario, sobre todo cuando van a estar estrictamente vinculados a la función bancaria, como que son precisamente representantes de esas instituciones.

Por estas razones, la comisión mantiene su despacho.

—Ocupa su banca el señor ministro de Agricultura, doctor Cosme Massini Ezcurra.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Deseo formular una pregunta al señor miembro informante respecto al inciso b) del mismo artículo.

Dice el inciso: «Los jubilados nacionales, provinciales o municipales, no podrán ser miembros del Consejo Agrario Nacional».

¿El propósito que persigue la comisión es sólo evitar la acumulación de emolumentos?

Sr. Landaburu. — Si me permite el señor senador, le anticipo que con el mayor gusto voy a contestar su pregunta una vez que se vote el inciso a).

Sr. Palacios. — Yo creía que ésta era la oportunidad.

Sr. Landaburu. — Se vota por incisos, señor senador, y es, precisamente, para ser más claro y más explícito, que le pido tenga la deferencia

de esperar un instante hasta que se vote el inciso a).

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

Siento no poder retirar mi indicación. Creo que el concepto con que se ha incorporado este artículo en el proyecto de ley es el de evitar la acumulación de funciones. El inciso a) del artículo 6º es, en ese sentido, muy explícito. Por otra parte, existe el antecedente de que esta cuestión ha sido discutida en la Cámara de Diputados, y ésta resolvió prohibir que los miembros del directorio de estas instituciones bancarias puedan ser simultáneamente miembros del Consejo Agrario Nacional. Las razones son para mí muy sencillas y atendibles. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor senador por San Luis, en el sentido de que las funciones de un miembro del directorio de estos bancos puedan ser desempeñadas con escasa dedicación. Al contrario; yo pienso que una función tan importante y tan delicada como ésa, debe llenar todas las horas útiles de un hombre de labor; y sabemos, además, que, como es natural, la mayoría de los miembros del directorio del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario tienen, además de sus funciones oficiales, algunas tareas particulares o asuntos privados que atender. ¿Cómo podríamos, entonces, entregar a una persona ya saturada con esas ocupaciones múltiples, las nuevas, complejas y trascendentes tareas que va a tener que desempeñar el Consejo Agrario Nacional? Insisto en que el espíritu de este artículo es precisamente el de evitar la acumulación de empleos o de cargos en personas que no podrán desempeñarlos por escasez material de tiempo. Creo que debemos tender a evitar esos «hombres orquesta», que sirven para todo y que aceptan actuar simultáneamente en funciones muy importantes y delicadas aunque no puedan atenderlas. Por todo ello, señor presidente, sostengo que conviene eliminar esta excepción, tal como fué resuelto por la Cámara de Diputados; pero si así no fuera, si el Senado lo resolviera de distinto modo, entonces propondría un agregado, a fin de que el director del Banco de la Nación o del Banco Hipotecario Nacional que fuera, a su vez, miembro del Consejo Agrario Nacional, deberá optar por uno de los sueldos de estas instituciones, es decir, que no podría acumular los dos sueldos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar por partes. Primero, el inciso a) del despacho de la comisión, en su primera parte.

Sr. Secretario (Figueroa). — (*Leyendo*): «Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado».

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar la segunda parte del inciso a) del despacho.

Sr. Secretario (Figueroa). — (*Leyendo*): «... y los miembros del directorio del Banco de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, en representación de éstos;»

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Arrieta. — Correspondería votar el agregado que propongo, de que no podrán acumularse sueldos.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Quiere tener la bondad de dictar el agregado que propone?

Sr. Arrieta. — Sí, señor. Sería así: «los que en tal caso sólo podrán devengar uno de los dos sueldos».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar.

Sr. Martínez. — Creo que ese agregado no corresponde en este artículo, porque en él habla de los que no pueden ser miembros del Consejo Agrario Nacional exclusivamente, y al aceptarse que pueden ser los directores de los bancos, no hay que poner ninguna condición.

Si el Senado cree que conviene que no haya superposición de sueldos, eso sería materia a considerar en el artículo referente al presupuesto del Consejo Agrario.

Sr. Arrieta. — Pero eso está en el artículo 5º.

Sr. Martínez. — Entonces, habría que reconsiderarlo; pero no corresponde, a mi modo de ver, que en un artículo que sólo establece las personas que no pueden ser miembros del consejo, se haga tal agregado.

Sr. Landaburu. — Creo que de votarse el agregado en alguna parte, tiene que ser aquí, donde se autoriza excepcionalmente a los directores de banco a ser miembros del consejo, a condición de que sólo devenguen uno de los dos sueldos. Esta frase incidental regula y fija el verdadero sentido de la frase anterior.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee: «Inciso b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales».

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

El señor senador por la Capital me había preguntado si la razón de ser de esta prohibición, radicaba en el propósito de que esas personas no pudieran tener un sueldo, además de la jubilación. Ese ha sido uno de los propósitos para establecer esta incompatibilidad. Otro habrá sido indudablemente la presunción de que esas personas jubiladas lleguen a tal situación en una edad avanzada de la vida, en que por regla general, no han de estar habitadas para funciones eficientes y activas, como las que en algunos casos puede reclamar un cargo de miembro del Consejo Agrario Nacional.

Sr. Palacios. — Pero pudieran estar habilitadas excepcionalmente, y entonces no podrían de ninguna manera, por esta disposición, ser designadas. A mí me parece que se podría modificar el inciso, así: «Los que perciben jubilación nacional, provincial o municipal, salvo que renuncien a su percepción o a su sueldo durante el término de su mandato».

Sr. Landaburu. — La comisión ha meditado sobre este punto, comprendiendo que se le podría hacer alguna observación como la que se acaba de escuchar en el Senado.

Sr. Palacios. — Podría presentarse el caso de un técnico eminente, que se viese privado de ocupar ese cargo en virtud de esta disposición.

Sr. Landaburu. — Excepcionalmente, un jubilado puede —acaso debe— ser miembro del Consejo Agrario. Entonces podría aceptarse el agregado que sugiere el señor senador, a condición de que no devengue la jubilación y el sueldo.

En el proyecto del diputado Horne que sirvió, entre otros, de base de ese despacho de la Cámara, la solución era esa, en el artículo 10, inciso c).

En una colaboración que he recibido hoy, con motivo del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, publicada por el señor Rebullida, del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Plata, en «Jurisprudencia Argentina» de hoy, se sugiere también la misma solución, de que se autorice a los jubilados a ser miembros del Consejo Agrario a condición de que devenguen una sola retribución.

Sr. Palacios. — El autor de esa colaboración es mi discípulo en la Universidad de La Plata, donde hemos estudiado el proyecto de colonización en un curso del doctorado.

Ahí se hizo esa observación por el joven Rebullida que es un distinguido abogado.

Sr. Landaburu. — El señor senador comprenderá toda la buena voluntad y el amplio espíritu con que la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, acepta toda modificación que tienda en última instancia a mejorar el despacho. Podría entonces, aceptarse, agregando al final del inciso b) las siguientes palabras: «Los jubilados nacionales, provinciales o municipales, salvo que renuncien a percibir la jubilación durante el término de su mandato».

Sr. Palacios. — A los que renuncien a su jubilación o al sueldo que les corresponda como director.

Sr. Landaburu. — «Los jubilados nacionales, provinciales o municipales, salvo que renuncien a percibir la jubilación o el sueldo durante el término de su mandato».

Sr. Palacios. — Muy bien.

Sr. Arrieta. — El señor miembro informante ha de tener la bondad de contestarme una pregunta referente al inciso b): ¿en qué situación estarían los retirados del ejército y de la armada? Creo que ellos no entran en la calidad o categoría de jubilados que se establece en este inciso y deberían, sin embargo, estar comprendidos en la prohibición que él establece.

Sr. Landaburu. — Yo creo que estarían exactamente en la misma situación que los jubilados. El retiro militar no es más que la jubilación de los militares.

Sr. Arrieta. — Entonces, si estamos de acuerdo, convendría incluirlos en el inciso.

Sr. Landaburu. — Yo creo que estas palabras del miembro informante bastarían, señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho en su nueva redacción.

Sr. Secretario (Figuerola). — (*Leyendo*): «Los jubilados nacionales, provinciales o municipales, salvo que renuncien a percibir la jubilación o el sueldo durante el término de su mandato.»

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodones o industrias análogas y de empresas colonizadoras;

d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

CAPÍTULO II

Funciones y deberes del Consejo Agrario Nacional

Artículo 7º — El Consejo Agrario Nacional tendrá las siguientes funciones y deberes:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, arrendar y enajenar los inmuebles así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estudiar planes de constitución de propiedades rurales que contemplen metódica y progresivamente todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores, estaciones y puertos de embarque y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.
- c) Convenir con los bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad, o que estuvieran gravados a aquéllos, en las condiciones que se estipulen.

—Se aprueba sin observación

—Se lee:

- d) Adquirir inmuebles del dominio privado en remates judiciales, o del Banco Hipotecario Nacional, o bancos de provincias que por sus leyes orgánicas estén facultados a proceder a la subasta de las propiedades de sus deudores.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Por las razones que he dado en la discusión en general, en la que he sostenido la conveniencia de que este proyecto se limite a la colonización de las tierras que actualmente posee el Estado en los bancos y reparticiones oficiales, voy a dejar constancia de mi voto en contra de este inciso y del siguiente.

No creo necesario abundar en mayores consideraciones porque tendría que repetir los argumentos que hice en ocasión de tratarse el proyecto en general.

—Sin otra observación, se aprueba el inciso d).

—Se lee:

- e) Adquirir inmuebles en cualquier punto del país o proponer al Poder Ejecutivo su expropiación.

—Sin observación, se aprueba

—Se lee:

- f) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, contemplando también la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas.

Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en la República mediante contratos de compraventa o de arrendamiento, con sujeción a las condiciones establecidas por esta ley. También podrá celebrar con los mismos fines, iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos, y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, por intermedio de un consejo de administración, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización a agricultores inmigrantes.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

En el último apartado de este inciso, se indican entre las funciones y deberes del Consejo Agrario, la de establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo por intermedio de un consejo de administración.

La Organización Internacional del Trabajo es integrante de la Sociedad de las Naciones, y no sabemos qué suerte correrá en el futuro. Sería prudente no establecer una cláusula tan rígida y exclusiva como la que contiene este inciso: establecer relaciones con dicha organización y sólo con ella.

Puede ocurrir que en el futuro, esta organización cambie de nombre o de designación, o desaparezca, o que se establezcan o creen otras organizaciones similares. Entonces, quizá conviniere dar a la cláusula una mayor elasticidad o flexibilidad. Propongo, en consecuencia, que a continuación de «Organización Internacional del Trabajo» se diga: «o instituciones internacionales similares» y se suprima el párrafo «por intermedio de un consejo de administración».

De manera que el apartado diría así: «y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo o instituciones internacionales similares, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización a agricultores inmigrantes».

Sr. Landaburu. — La comisión acepta, señor presidente, siempre que el señor senador sustituya la conjunción «o» por «e».

Sr. Arrieta. — Conforme, señor senador.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso f) con el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy, aceptado por la comisión.

—Se vota y aprueba el inciso f) con la modificación propuesta.

—Se lee:

- g) Estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura y someter a la con-

sideración de los poderes públicos las medidas conducentes;

- h) Fomentar el cooperativismo en todas sus formas, aplicando, dentro de cada plan, las leyes del hogar, crédito agrícola, cooperativas, u otras que se dicten en el futuro, vinculadas con la economía agraria y la colonización;
- i) Propender en las distintas colonias a la formación de industrias rurales transformadoras, de acuerdo con la naturaleza de los cultivos que se realicen en aquéllas; y facilitar la aplicación y fomento del crédito agrario directo, colaborando con el Banco del a Nación Argentina;

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

- j) Propender a que la instrucción impartida en las escuelas rurales, se oriente hacia la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos;

Sr. García Fernández. — Pido la palabra.

Para proponer una pequeña modificación, reemplazando donde dice «propender», por las siguientes palabras: «Colaborar con el Consejo Nacional de Educación y con los consejos provinciales para que la instrucción impartida en las escuelas rurales, se oriente hacia la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos.»

Es indudable que el propósito del inciso es bueno en principio, pero el propender a ello es una tarea del Parlamento o del Poder Ejecutivo, y en la forma en que está redactado parecería que estas facultades son delegadas al Consejo Agrario.

Por eso, propongo que se suprima esa palabra «propender», y se reemplace por las palabras «Consejo Nacional de Educación y los consejos provinciales».

Sr. Landaburu. — La comisión acepta substituir el verbo «propender» por «colaborar».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso j) con la modificación propuesta por el señor senador por Tucumán y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

- k) Fomentar la utilización en común de las maquinarias industriales y agrícolas, a fin de obtener un mayor perfeccionamiento agrario;

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

- l) Gestionar la utilización de cauces de agua para riego de las tierras de las colonias y estimular el empleo de la energía eléctrica en los trabajos rurales;

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

He propuesto una nueva redacción de este inciso l), que no modifica su contenido; es simplemente un cambio de forma, que me parece más claro y preciso. Ruego que por Secretaría se dé lectura.

Sr. Secretario (Figueroa). — (*Leyendo*): «Inciso l) Procurar el aprovechamiento de las aguas superficiales para el riego de las tierras de las colonias ubicadas en regiones de lluvia insuficiente y estimular el empleo de la energía más económica y adecuada en los trabajos rurales.»

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La comisión no tendría inconveniente en aceptar el cambio de redacción que sugiere el señor senador por Jujuy. Pero es que la proposición del señor senador entraña también una modificación de concepto que la comisión ya no puede aceptar con la misma facilidad.

El señor senador por Jujuy hace extensivo este precepto a las colonias ubicadas en regiones de lluvia insuficiente, y eso no dice el despacho. Si el cambio se refiriese a la redacción, la comisión aceptaría.

Sr. Arrieta. — No tengo inconveniente, señor presidente, en suprimir de mi proposición las palabras que se refieren a las regiones de lluvia insuficiente.

Sr. Landaburu. — El señor senador hace de la excepción la regla. Así, el precepto está orientado exclusivamente a aprovechar las aguas en las tierras de lluvia insuficiente, siendo que eso debe ser excepcional. En la forma en que la comisión lo ha redactado, el precepto se puede aplicar a todas las tierras del país.

Sr. Arrieta. — Bien, repito que no tengo inconveniente, pero hago notar que en la redacción que he propuesto he tratado de no alterar el sentido de este inciso. Y yo creí que cuando se establece que el Consejo Agrario Nacional procurará la utilización de las aguas para el riego, debía ser solamente en aquellas zonas en que las lluvias fueran insuficientes y en las que, por consiguiente, el riego fuera necesario. No me parece razonable que el consejo estimule el uso de riego, que siempre es costoso, en zonas donde llueve suficientemente. Pero no tengo inconveniente, como digo, en adaptar mi redacción a la forma que sugiere el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Landaburu. — Quedaría así, entonces: «Procurar el aprovechamiento de las aguas superficiales para el riego de las tierras y estimular el empleo de la energía más económica y adecuada en los trabajos rurales.»

Sr. Presidente (Patrón Costas). — En consideración el inciso l), que ha leído el señor miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa

—Se lee:

- m) Promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre;
- n) Organizar en el interior y en el exterior, por intermedio de la representación diplomática y consular, una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley y el conocimiento de las zonas agrícolas del país;
- o) Nombrar el personal técnico y administrativo mediante concursos de selección, debiendo exigir para aquellos cargos que lo requieran, títulos expedidos por las universidades o institutos nacionales especializados, por institutos similares extranjeros o argentinos que se hayan graduado en ellos como becarios de la Nación o de las provincias y en el caso de que ciudadanos naturalizados graduados en el extranjero, siempre que sus títulos hayan sido revalidados en el país. Excepcionalmente podrá designar directamente técnicos extranjeros o del país, de reconocida capacidad, cuando sus actividades fueran necesarias;
- p) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley;
- q) Formular su presupuesto anual de gastos, con la aprobación del Poder Ejecutivo, el que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Congreso;
- r) Dictar su reglamento interno;

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

- s) Elevar anualmente al Congreso la memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

Sr. Arrieta. — Aquí debería decir, señor presidente: «Elevar anualmente al Honorable Congreso, por intermedio del Poder Ejecutivo, la memoria», etcétera.

Es una cuestión de simple procedimiento. En este proyecto de ley no se establece en ningún momento de qué ministerio va a depender el consejo, aun cuando es natural que será del Ministerio de Agricultura; y es evidente que el consejo no mantendrá relaciones directas con el Congreso, sino con el Poder Ejecutivo.

De manera, pues, que corresponde establecer el curso del procedimiento.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La distribución de las materias está hecha por la ley de ministerios, de manera que es induda-

dable que todo lo que se refiere al Congreso Agrario Nacional, tendrá comunicación con el Poder Ejecutivo por intermedio de ese departamento; pero la comisión no tiene inconveniente en aceptar el agregado que propone el señor senador por Jujuy.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el despacho de la comisión, con el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy.

—Se lee:

- s) Elevar anualmente al Congreso, por intermedio del Poder Ejecutivo, la memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

CAPÍTULO III

Inmuebles destinados a la colonización

Artículo 8º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras fiscales que se consideren aptas;
- b) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos, en virtud de las leyes y reglamentos que las rigen o de convenios que celebren con sus deudores;
- c) Las que el consejo adquiera por compra o sean expropiadas de acuerdo con la presente ley;
- d) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

—Sin observación, se aprueba.

Sr. Martínez. — Pido la palabra, para una simple aclaración que, desde luego, me parece que está contenida en el artículo. Se refiere a las tierras que pueden pasar a los bancos, en virtud de adjudicaciones en pago de sus créditos por convenios que celebren con sus deudores.

Es evidente que las tierras que deben pasar al Consejo Agrario, son aquellas que al mismo tiempo reúnan las condiciones del artículo 9º y no las otras tierras, que por el hecho de haber pasado a los bancos, si no tienen las características necesarias para la colonización, no están sujetas a este régimen y los bancos oficiales pueden disponer de ellas, como hasta ahora, en otra forma y en cualquier oportunidad.

Sr. Landaburu. — En cuanto a las tierras que los bancos dispongan para otros destinos, de acuerdo con las leyes...

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Hago notar a los señores senadores que el inciso respectivo ha sido ya aprobado.

Sr. Martínez. — Pediría que se reconsiderase para una aclaración en el sentido indicado.

Sr. Laurencena. — Eso está resuelto en el artículo 9º, cuya modificación yo iba a proponer.

Sr. Martínez. — El artículo 9º se refiere al inciso c), vale decir, a las tierras que se adquieran.

Sr. Laurencena. — Iba a solicitar que se extendiera la disposición a todo el artículo 8º, y no al inciso c) solamente, porque todas las tierras deben ser aptas para el cultivo.

Sr. Martínez. — No valdría la pena que se le endosaran al Consejo Agrario tierras para colonización, que no están en condiciones de ser colonizadas. En cambio, la forma en que está redactado el inciso c) del artículo 8º trabaría la acción de los bancos ya que no las podrían enajenar porque deberían, de acuerdo con la ley, ser adjudicadas a la colonización. Por eso, pido esta aclaración.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Con el mayor gusto la comisión va a producir la aclaración que desea el señor senador por Córdoba.

Este artículo hay que entenderlo vinculándolo con otros del despacho, entre ellos con el artículo 19, que dice: «Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al Consejo Agrario Nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas.» De manera que los bancos no entregan oficiosamente al Consejo Agrario Nacional las tierras, sino que esperan el requerimiento que éste les hace, pero debe pagarlas, previo el estudio de sus condiciones ecológicas y comprobación de las condiciones que requiere la ley para ser colonizadas.

Pueden no ser tierras que estén, por ejemplo, en las distancias que señala el artículo 9º, porque esta ley no limita a estas tierras el plan de colonización; excepcionalmente, admite que pueden ser tierras a mayor distancia.

El Consejo Agrario Nacional, en cada caso, al hacer ese requerimiento a los bancos y a las instituciones oficiales, designará las tierras, y los bancos están obligados a transferírselas, lo que no les priva, en modo alguno, de enajenarlas libremente, antes de ese requerimiento, en la forma que sus disposiciones o cartas orgánicas lo establezcan.

No sé, si he satisfecho el deseo del señor senador por Córdoba.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

El señor miembro informante de la comisión ha satisfecho a medias mis dudas.

Esta ley tiene, a mi modo de ver, estas directivas: deben ser entregadas al Consejo Agrario Nacional, para ser colonizadas: primero, las tierras fiscales que se consideran aptas. De modo que claramente está expresado que las tierras ineptas no se entregan. Ahí es terminante la ley. segundo, pueden ser entregadas a la colonización las tierras privadas que se expropian y que reúnan las condiciones que específicamente se establecen en el artículo siguiente, que es el 9º; vale decir, que se encuentren a determinada distancia de las estaciones y de los puertos de embarque, condiciones ecológicas convenientes, adecuada rotación de los cultivos, costo de transporte en relación económica aceptable con el valor del producto y cantidad de lluvias abundante. Si esas tierras privadas no reúnen esas condiciones, no pueden ser materia de expropiación por parte del Consejo Agrario Nacional y no entran en el régimen de esta ley de colonización.

Sr. Landaburu. — Excepcionalmente, sí, señor senador.

Sr. Martínez. — No estoy hablando de las excepciones, sino del sistema de la ley.

Un tercer grupo de tierras: las de dominio privado de las provincias o municipalidades y la de los particulares que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de esta ley. Ahí es optativa la ley: las provincias, las municipalidades y los particulares pueden ofrecer sus tierras. Y cuarto el punto que es materia del pedido de aclaración: las tierras que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los que específicamente determinaron su compra o adquisición. Y se agrega, además: «o las tierras que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos —se refiere a los bancos oficiales— en virtud de las leyes y reglamentos que las rigen o de convenios que celebren con sus deudores».

En la forma en que está redactado este inciso b), se establece de una manera categórica que un banco oficial que recibe en pago de un crédito, tierras de sus deudores, no puede enajenar esas tierras; está obligado a transferírselas al Consejo Agrario Nacional, siempre que éste las requiera y, desde luego, las pague en virtud del artículo 19 a que se ha referido el señor miembro informante de la comisión.

Me parece, entonces, que esta disposición no es conveniente, más aún que sería antieconómica, porque, tratándose de tierras que no sean susceptibles de colonización, dentro del criterio del artículo 9º, ¿para qué estas instituciones van a tener retenidas, substraídas del comercio, extensiones de tierra que no reúnan esas características y que, de acuerdo con las disposiciones de la ley, no podrían enajenar ante la expectativa de que el Consejo Agrario Nacional se las requiriese? Es evidente que la simple lógica indicaría que el Consejo Agrario Nacional nunca va a requerir tierras que no reúnan aquellas condiciones. Pero, como desgraciadamente el texto de la ley no es claro en este sentido, y cuando se refiere a las condiciones específicas para la colonización, lo hace concretamente sobre las tierras del dominio privado, es necesaria una aclaración al respecto, que es por lo que la he solicitado al señor miembro informante. A mi modo de ver, ya sea en este inciso o, como lo acaba de decir el señor senador por Entre Ríos, al tratarse el artículo 9º, convendría establecer que las tierras que tendrían, en realidad, esa interdicción, son únicamente aquellas aptas para la colonización.

Nada más.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Permítame, señor senador. Se ha reabierto el debate sobre el inciso b). La Presidencia entiende que para regularizar la discusión, sería necesaria una moción de reconsideración.

Sr. Landaburu. — Yo creo que, con el anuncio del agregado al artículo 9º, hecho por el señor senador por Entre Ríos y las pocas palabras que voy a pronunciar a título de aclaración, quedará satisfecho el señor senador por Córdoba.

No hay tal interdicción; no hay tal indisponibilidad de tierra alguna en poder de los bancos oficiales o instituciones autárquicas. Los bancos se desenvolverán con entera libertad y manejarán y dispondrán libremente de todas las tierras que adquieran, de acuerdo con sus cartas orgánicas, con los convenios que celebren con sus deudores o por adjudicación en las ejecuciones que sigan contra ellos. Si, mientras la tierra está en poder del banco o de esa institución autárquica, el Consejo Agrario les requiere que pasen a su dominio para entregarla a este plan de colonización, esa institución está obligada a hacerlo; pero si no media requerimiento, los bancos e instituciones disponen con entera libertad de esas tierras.

Sr. Martínez. — Eso no lo dice el inciso

b). Me satisface la explicación del señor miembro informante, pero la redacción del inciso no dice eso.

Sr. Landaburu. — Dice estando en el dominio de la institución. Si ha salido de ese dominio, ¿quién va a reclamar?

Sr. Martínez. — Entonces, ¿qué sentido tiene que «en adelante pasen a su poder»?

Sr. Landaburu. — Porque se refiere a lo actual y lo futuro. Pero no significa ninguna interdicción, ninguna prohibición para disponer de las tierras no mediando un requerimiento del Consejo Agrario Nacional.

Sr. Martínez. — Me doy por satisfecho, señor presidente, con la explicación del señor miembro informante, que, en realidad, interpreta la ley y que aclara el contenido del inciso b), que no tiene esa claridad de expresión.

—Se lee:

d) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

—Sin observación, se aprueba.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Voy a proponer un artículo nuevo, que debería ir a continuación del que acaba de aprobarse, y se refiere a la forma como estas tierras han de pasar al Consejo Agrario Nacional. Voy a dar lectura del artículo que propongo: 1º — Las tierras fiscales y las que pertenezcan a los ministerios nacionales que se resuelva colonizar, pasarán al consejo sin cargo alguno. 2º — Las tierras que pertenezcan a los bancos oficiales y al Consejo Nacional de Educación le serán transferidas por el precio que se convenga con aprobación del Poder Ejecutivo, y su pago podrá hacerse en efectivo o en títulos nacionales. El precio de la tierra no será fijado por el de adquisición, sino por su valor real fijado por peritos. 3º — Las instituciones mencionadas podrán entregar sus tierras o parte de ellas al consejo con aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con un convenio de colonización, en cuyo caso la propietaria percibirá los ingresos en concepto de amortización e intereses, que produzca la misma tierra, según el precio de venta, y el consejo podrá percibir como comisión hasta el 1 % del precio. 4º — Las provincias y municipalidades que entreguen al consejo las tierras de su propiedad, podrán estipular en los contratos condiciones especiales de colonización, pero el consejo no podrá en ningún caso comprometerse a hacerles un pago anual mayor que el in-

greso que produzca la amortización e intereses de la misma tierra.»

Los fundamentos de esta iniciativa aparecen claros. El inciso 1º se refiere a tierras fiscales, que lógicamente deben pasar al Consejo Agrario sin cargo alguno.

Sr. Landaburu. — Desde luego. Si el consejo toma a su cargo el cumplimiento de las leyes generales de tierras públicas, todas las tierras fiscales van a ser administradas y dependerán del Consejo Agrario.

Sr. Laurencena. — Pero conviene especificarlo. El inciso 2º, que se refiere a la tierra de los bancos oficiales y del Consejo Nacional de Educación, tiende a estipular lo que no establece expresamente el proyecto, es decir, que puede pagarse en títulos o en dinero efectivo, y a establecer especialmente que el precio de la transferencia no ha de ser necesariamente el de adquisición; es decir, que estos organismos están facultados a convenir un precio menor. Esto tiene importancia, especialmente en cuanto se refiere a los bancos, que recibiendo a veces los inmuebles en pago de créditos, suelen aparecer abonando precios excesivos. El precio comercial —diríamos así— a que podrán ser transferidos al consejo, necesariamente tiene que ser inferior. Conviene una disposición que establezca expresamente, pues, que el precio de transferencia no ha de ser necesariamente el precio de adquisición sino el que se convenga.

Sr. Arrieta. — ¿Eso no está contemplado en los artículos 18 y 19?

Sr. Landaburu. — Sí, señor senador, está contemplado en esos artículos.

Sr. Laurencena. — No lo veo claro; por eso creo que conviene hacerlo en forma expresa.

Lo principal de este artículo que propongo, es el inciso 3º, en virtud del cual estas instituciones podrán entregarle al consejo sin previo pago al contado, la tierra, a efecto de que éste la colonice de acuerdo con el régimen del mismo, y le pase a la institución transferente el producido que la misma tierra debe rendir por concepto de amortización e intereses. Sería una forma por la cual algunos establecimientos, como el Banco de la Nación y el Banco Hipotecario Nacional, podrían colaborar eficazmente en la extensión de la obra de colonización, y a su vez el consejo podría ampliar esa acción sin necesidad de disponer de recursos en efectivo.

Esta misma disposición la extendiendo a las provincias y municipalidades, a las cuales, es indudable, hay que pagarles la tierra; pero no conviene que se haga en efectivo, para que ellas

estén a los resultados de la colonización, de tal manera que en vez de cobrar sus tierras en un precio convencional y en efectivo o en títulos, lo hagan por las cantidades que ingresen por concepto de las mismas tierras que el consejo da.

Con estas breves palabras dejo fundado el artículo que he propuesto.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Yo lamento mucho que el señor senador por Entre Ríos no haya entregado a la comisión, con cierta anticipación el artículo nuevo que propone, que es fundamental, para haberlo meditado por más tiempo; por lo que he podido entenderle, la intercalación de este artículo, en esta parte del despacho, va a perturbar un poco la consideración de algunos artículos venideros. La objeción fundamental que hace el señor senador por Entre Ríos está contemplada expresamente en el artículo 19. Me refiero a que el Consejo Agrario Nacional no está obligado a pagar a los bancos y a las instituciones autárquicas, por las tierras que le reclame para colonizar, el precio de adquisición que él hubiese oblado.

Constituye, precisamente, una modificación de las más fundamentales que hemos introducido a la sanción de la Cámara de Diputados, y en la que ha colaborado el señor ministro de Agricultura, presente en el recinto. Hemos eliminado, precisamente del artículo 19, las siguientes palabras: «teniendo en cuenta el importe invertido en su adquisición por las instituciones que hagan la transferencia».

Esa frase ha sido eliminada de la sanción de la Cámara de Diputados, precisamente recogiendo el propósito fundamental que inspira la modificación que propone el señor senador por Entre Ríos. Fuera de eso, señor presidente, que ya está contenido en el despacho, no hay en su proposición sino lo que se refiere a la posibilidad de pagar en títulos, que podemos contemplar cuando se trate el artículo pertinente.

Sr. Laurencena. — ¿Me permite, señor senador?

Yo no considero que lo fundamental sea la parte a la que se ha referido el señor senador, porque precisamente el artículo prevé lo relativo al precio. Lo fundamental es que la transferencia pueda ser no previo pago, sino bajo el régimen de colonización, que es el inciso 3º.

Sr. Martínez. — En el artículo 18 está eso implícitamente contemplado, cuando dice en el segundo párrafo: «A este objeto podrá adquirirlas, en las condiciones de precio y de plazos, que estipulen con dichas instituciones.»

Sr. Laurencena. — El precio y el plazo es una cosa y la forma de pago es otra distinta.

Sr. Martínez. — ¿Cuál es la forma de pago, sino el precio y el plazo, señor senador?

Sr. Laurencena. — Yo he proyectado esto, en primer lugar, porque creía que convenía que estuvieran esos tres o cuatro puntos en un solo artículo. Prevé, exclusivamente, la transferencia para colonización y después, prevé lo relativo a las tierras de las provincias y de las municipalidades, cuya forma de distribución no está claramente establecida, en lo que se refiere a su adquisición. Creo que el señor senador al dirigirme ese reproche de no haber entregado a la comisión, tal vez...

Sr. Landaburu. — No ha sido un reproche, sino que he lamentado no tener todos los antecedentes para contestarle al señor senador con la claridad y eficacia con que lo hubiera deseado hacer.

Sr. Laurencena. — Creo que el señor senador tiene razón, pues las reformas de esta naturaleza conviene hacerlas conocer a la comisión; pero yo no lo he hecho porque no he tenido tiempo y se me ha presentado una serie de inconvenientes.

Por consiguiente, pediría que esa proposición que he formulado se postergue hasta que se considere el artículo 18, en cuyo reemplazo, podría sancionarse.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta el aplazamiento del artículo 17 y de la proposición formulada por el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda aplazada la consideración del artículo 17 y de la proposición formulada por el señor senador por Entre Ríos.

—Se lee:

Artículo 9º — Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior todo inmueble que:

Sr. González Iramain. — Pido la palabra.

En las pocas palabras que pronuncié en la sesión de ayer, señor presidente, yo observé el articulado en general del proyecto, me he referido a las condiciones que enumera este artículo.

Sr. Laurencena. — ¿Me permite señor senador?

El señor senador se va a referir al inciso a). Yo me voy a referir a las primeras palabras con que se inicia el artículo.

Sr. González Iramain. — Si es así, tiene prelación el señor senador para usar de la palabra.

Sr. Laurencena. — El artículo establece que serán consideradas aptas las tierras en la forma

que indica, a los efectos del inciso c) del artículo anterior. Yo voy a proponer que se consideren aptas, a los fines del artículo anterior...

Sr. Landaburu. — Permítame el señor senador.

Es precisamente a lo que se refirió la aclaración que produjo hace un instante, contestando al señor senador por Córdoba, cuando le dije: el Consejo Agrario Nacional podrá adquirir de las instituciones oficiales tierras que no reúnan todas las condiciones que ella establece en el artículo 9º.

Sr. Laurencena. — Voy a insistir en mi proposición, señor presidente, porque creo que el señor senador está en un error. El artículo 9º establece cuáles son las tierras que, en concepto de la ley, son aptas para colonización.

Yo creo que en ningunas tierras, sean de instituciones oficiales o privadas, debe colonizarse, si no son aptas para esos fines y no reúnen las condiciones para la colonización.

Con respecto a las condiciones especiales de la distancia, ya el inciso a) de ese artículo tiene la excepción para las circunstancias especiales, porque las demás condiciones no deben faltar en ninguna clase de tierras que se colonicen. Cualquier clase de tierras, no se va a colonizar, si es de una provincia, porque ésta quiera o lo proponga, si no reúne las condiciones. El éxito de la colonización depende principalmente de eso, y ya lo dijo el señor ministro de Agricultura, en ocasión de tratarse en general el despacho. El éxito de la colonización depende de la buena selección de la tierra, y allí radica fundamentalmente el secreto de la cuestión, y cuando se haya establecido en este artículo esta serie de condiciones que deben reunir, esos requisitos deben aplicarse a todas las tierras, de cualquier origen que sean, ya se trate de instituciones oficiales o privadas, o de las provincias o municipalidades.

No creo que deba exceptuarse, simplemente, para las tierras que han de adquirirse. Con respecto a todas las tierras hay que ser exigente, porque el éxito de la colonización depende de eso.

Por eso, señor presidente, insisto que eso se extienda a todo el artículo anterior.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Lamento tener que insistir en el concepto que he manifestado anteriormente.

Se explica fácilmente que tratándose de tierras que se van a comprar o expropiar a particulares, se exija concreta y perentoriamente todas las condiciones fijadas en el artículo 9º. Pero, ¿por qué no ha de concebirse y desearse

que cuando esas tierras sean colonizadas —ésta es una ley para muchos años— o cuando pudieran resultar insuficientes, el Consejo Agrario Nacional requiera de las instituciones oficiales que le entreguen las que tienen a mayor distancia de aquéllas, para dedicarlas a la colonización?

Sr. Laurencena. — Pero la distancia, señor miembro informante, ya tiene su excepción en el inciso correspondiente.

Sr. Martínez. — Hay otras consideraciones muy importantes que tener en cuenta, como ser, que con esta ley desaparece la Dirección de Tierras, porque se incorpora al sistema del Consejo Agrario Nacional, y entonces, automáticamente, todas las tierras fiscales a que se ha referido el inciso a) tienen que pasar...

Sr. Laurencena. — No, señor senador, porque el inciso a) se refiere a las tierras aptas.

Hay dos cosas; las tierras fiscales que no sean aptas tendrán que estar sometidas al régimen de las tierras...

Sr. Martínez. — Pero bajo la jurisdicción del Consejo Agrario.

Sr. Laurencena. — Sí, pero no a los efectos de la colonización que prevé esta ley. De lo contrario, tierras en esas condiciones habría que abandonarlas porque evidentemente no están dentro de las condiciones que establece el inciso a) del artículo 89: «Las tierras fiscales que se consideren aptas.»

Sr. Martínez. — Pero eso se refiere al título del capítulo que dice: «Inmuebles destinados a la colonización.»

Sr. Laurencena. — La ley hace distingo entre las tierras fiscales generales, que comprenden setenta y tantos millones de hectáreas y el millón y pico que, según el Poder Ejecutivo, es apto para colonización.

Ahora cuando se trata de esas tierras y de la selección de las mismas, no puede prescindirse de las condiciones del artículo 99; si no se cometería un error, porque hay que ver, señores senadores, que la colonización es un conjunto de intereses y que el éxito de todos los intereses involucrados en el asunto, será el éxito de la ley.

Si se puebla de colonos las tierras ineptas o inferiores, va a fracasar la ley junto con los colonos. De manera que si no se seleccionan todas las tierras a colonizar, se va a cometer un error.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Precisamente las razones que se han dado ampliamente confirman el aserto de la comisión. Las tierras que se compran o se expropian a particulares, deben ser especialmente aptas y reunir las condiciones del artículo 99; pero si el

Consejo Agrario ha de tener la administración de todas las tierras fiscales, se puede adquirir o se puede requerir de las instituciones autárquicas, tierras relativamente aptas, porque eso de la aptitud es un concepto relativo. ¿Por qué una vez que se complete un plan de colonización dentro del radio que fija el artículo 99, no ha de poder colonizarse una parte de esas tierras fiscales o de esas tierras que están en poder de las instituciones autárquicas a mayor distancia? Precisamente se ha señalado como uno de los presuntos errores de la ley, su limitación sobre determinadas tierras públicas. Se ha dicho que no ve el interior del país, que no ve las provincias del Norte o del Oeste argentino; se nos han dirigido verdaderos reproches.

—El señor senador Laurencena hace una observación que no alcanza a percibirse.

Sr. Landaburu. — No señor, de ninguna manera. No dice inepto el despacho y hay que creer que el Consejo Agrario Nacional va a proceder con un criterio acertado, seleccionando las tierras en la mejor forma posible, desarrollando su plan de colonización en forma gradual. Empezará por comprar en remate o por expropiar a los particulares las mejores tierras, pero si colonizadas esas tierras, en el acervo de las instituciones autárquicas hay tierras colonizables, ¿por qué no va a llevar su acción a esas tierras, estando ya en el dominio del Estado o de esas instituciones autárquicas, que se las van a transferir con facilidades de pago y en la mejor forma? La comisión no quiere cerrar esa puerta a la expansión del plan colonizador, y por eso mantiene su despacho, reservándose lo que se refiere al pago con títulos para la oportunidad señalada.

Sr. García Fernández. — ¿La comisión no tendría inconveniente en agregar el inciso d) en esta parte del artículo 99?

Sr. Landaburu. — El despacho se refiere al inciso c), que son las tierras que compra y expropia a particulares.

Sr. García Fernández. — ¿Pero si las municipalidades o provincias ofrecen tierras lejanas y mejores?

Sr. Landaburu. — Esas tierras, señor senador, sólo pueden entrar en el plan de colonización por otro camino y a otro título. Ésas tierras no las compra el Consejo Agrario, sino en la forma que vamos a ver más adelante en un capítulo especial que el despacho contiene sobre ese punto.

Sr. González Iramain. — Pido la palabra.

El inciso a) de este artículo que se discute, tiene un segundo párrafo. Yo voy a proponer

que se vote sólo el primer párrafo hasta la palabra «embarque» inclusive, para pedir que el segundo párrafo del inciso pase a figurar, ampliado con las pocas palabras que propondré en seguida, a continuación del inciso c) del mismo artículo, como párrafo aparte y cerrando la enunciación del inciso del artículo 9º.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar primero el encabezamiento del artículo 9º.

—Se lee:

Artículo 9º — Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior todo inmueble que:

—Sin observación, se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso a), hasta la palabra «embarque».

—Se lee:

a) No se encuentre a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque;

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

b) Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y la experiencia de la zona;

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee y aprueba el inciso c) en la siguiente forma:

c) Pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos o la explotación de especies animales. Sólo por razones especiales, que se expresarán en cada caso, el consejo podrá resolver la adquisición de inmueble a mayor distancia que los mencionados;

—Se lee:

d) El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto;

e) La cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos para los cuales se les destina;

—Sin observación, se aprueba.

Sr. González Iramain. — Pido la palabra.

Corresponde votar aquí, señor presidente, el último párrafo del inciso a), que quedaría así redactado: «sólo por razones especiales».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Permitame, señor senador. El párrafo a que se refiere el señor senador se incorporó al inciso c) y ya fué votado.

Sr. González Iramain. — No, señor presidente.

Sr. Landaburu. — Efectivamente, la Secretaría leyó el inciso c), porque el señor senador al formular su proposición, incurrió en un error, porque en lugar de referirse al inciso e) se refirió al inciso c), pero podríamos pasarlo al final del artículo.

Sr. González Iramain. — He propuesto claramente la colocación del segundo párrafo del inciso a), porque no puede figurar como inciso ya que los incisos del artículo son las condiciones del artículo mismo. De manera que esto debe figurar como segundo párrafo del inciso e).

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Voy a proponer un nuevo inciso, de manera que quedaría al final de ése.

Sr. González Iramain. — Muy bien, si se va a incorporar otro inciso, corresponde votarlo después.

Sr. Serrey. — Propongo un nuevo inciso, al que atribuyo verdadera importancia, siquiera sea para aclarar el concepto de esta ley, en el sentido de que la colonización se ha de aplicar en todo el territorio del país.

Como ya se ha dicho, existen condiciones topográficas y climáticas absolutamente distintas en las diversas regiones del país. Las provincias del Sur y del centro y las gobernaciones de La Pampa y Río Negro, participan de las características que pueden llamarse pampeanas, es decir, son tierras que no tienen bosques, que no hay necesidad de desmontar para dedicarlas al cultivo y el régimen de las lluvias; durante todo el año se presta a todos los cultivos. Entre tanto, las regiones del Norte y del Oeste del país están cubiertas de bosques que es necesario desmontar y destroncar para dedicarlas al cultivo y están también sujetas a un régimen de lluvias que solamente caen en determinadas épocas del año, generalmente en los meses de verano.

Naturalmente, la colonización más fácil, más productiva, sería la que se practique en las regiones del Sur y centro, que requieren menos gastos y cuyos productos serán más fácilmente vendidos por la abundancia de vías de comunicación y por su vecindad a los mercados consumidores.

Pero, precisamente, esta ley debe aplicarse también con preferencia a las regiones alejadas del centro del país.

Sr. Martínez. — ¿Con preferencia, ha dicho el señor senador?

Sr. Serrey. — Tal vez con preferencia y le voy a decir por qué.

Sr. Martínez. — Es la política que fracasó...

Sr. Serrey. — Permítame, señor senador. Déjeme expresar mi pensamiento antes de contradecirme.

Es la política que tiende a disminuir, en lo posible, las desigualdades naturales; es la política del Brasil, con respecto a Pernambuco y Bahía, la que ha construido obras considerables, para nivelarlas en lo posible con Río Grande y San Pablo que no las necesitaban.

Precisamente, las tierras más fértiles del país son éstas, cubiertas de bosques y que es necesario someter a riego. Naturalmente, para realizarlo de inmediato, se tropieza con el inconveniente de que hay que realizar grandes gastos y con la distancia a los mercados. Entonces, como este artículo dice cuáles son las condiciones de las tierras para ser consideradas aptas para la colonización, falta una, que es la que trato de solucionar por medio del inciso, que pido que se lea. Hago observar que la prosperidad de algunas regiones del país se ha debido principalmente al riego. El caso de Mendoza, por ejemplo.

Sr. Martínez. — No se olvide el señor senador que hay otros aspectos de la legislación.

Sr. Serrey. — Precisamente, la primera de esas obras de riego es debida a Cipolletti, en quien pensaba ayer cuando se quería excluir a los extranjeros naturalizados de este consejo, cuando a veces han sido precursores del progreso y han contribuido a labrar la grandeza del país.

Pido, pues, que se lea el inciso propuesto por mí.

—Se lee:

f) Aun siendo boscoso, posea total o parcialmente riego artificial, o sea posible dotarlo de él por obras que el Consejo Agrario haga construir.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Yo lamento, señor presidente, profundamente, tener que oponerme al agregado que propone el señor senador por Salta. Percibo perfectamente bien los sanos propósitos que lo mueven a hacer esa indicación, pero creo que vamos a perturbar esta ley de colonización, sobre la cual, como se dijo en el debate en general, se han cifrado tantas esperanzas y cuyos medios de realización, sin embargo, son tan relativos, complicándola con un sistema de poner en actividad

económica, zonas del país que pueden quedar como reserva y que, hoy por hoy, no son necesarias.

Nadie puede discutir, señor presidente, las ventajas y la transformación que se ha operado en muchas regiones, en virtud del cultivo intensivo. El señor senador por Salta ha citado, y con razón, a la provincia de Mendoza, que es un emporio de riqueza; pero, como todas las cosas humanas, tal forma de cultivo tiene también sus imperfecciones, y la abundancia de la producción, estimulada por el riego, en esa provincia como en otras regiones argentinas, ha determinado que el Congreso nacional tuviera que sancionar una ley creando la Junta Reguladora de Vinos y reduciendo la extensión de los cultivos vitivinícolas, llegándose hasta la extirpación de las cepas.

Yo pregunto, señor presidente, cuando tenemos problemas tan grandes para colocar la producción argentina, fruto del cultivo extensivo, ¿podemos pensar seriamente en aumentar los cultivos intensivos, con una población en este país todavía reducida? Si el propósito de esta ley, el propósito central, es transformar los habitantes del agro argentino de arrendatarios en propietarios, para afincar la población, ¿para qué vamos a establecer declaraciones de principios, como significa en definitiva, la proposición del señor senador por Salta, que en la práctica no podrá ser realizada? Cuando he demostrado la insuficiencia de los medios económicos que se le dan a este consejo para realizar el programa proyectado, ¿se lo puede complicar hablando de obras de riego que debe realizar?

Yo creo que la idea del señor senador por Salta, buena, desde luego en sí, puede ser materia de un estudio serio en un plan ulterior, para valorizar esas otras regiones del país, pero que, hoy por hoy, perjudicaría a la economía, a los principios y a los propósitos de esta ley.

Nada más.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Olvida el señor senador los dos fines esenciales de esta ley. Primero, que tiene un carácter nacional, es decir, que está destinada a todo el país y que su objeto primordial es poblarlo; y olvida también que esta ley tiene un carácter permanente.

Sr. Martínez. — Lo que no olvido es la insuficiencia de los medios.

Sr. Serrey. — Haga el favor el señor senador de tener un poco más de paciencia; yo lo he escuchado a él sin interrumpirlo.

Sr. Martínez. — Tengo una paciencia infinita...

Sr. Serrey. — Pero no debe contradecir antes de que uno termine de exponer su pensamiento. Es un sistema muy curioso el de contradecir antes de que quede expresado claramente lo que el preopinante quiere decir.

Sr. Martínez. — No se disguste, señor senador. Estoy revelando que tengo paciencia y el que demuestra no tenerla es el señor senador.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — El reglamento ampara al señor senador por Salta, quien tiene la palabra.

Sr. González Iramain. — Ha terminado la incidencia.

Sr. Serrey. — Claro que la tengo yo, y, por lo tanto, voy a continuar en el uso de ella.

El señor senador olvida que la ley debe tener un carácter permanente y que el artículo dice que serán consideradas aptas a los fines de la colonización, las tierras que se encuentren en tales condiciones, es decir, que las que no están en esa enumeración se consideran inaptas, pero no es improbable que en un porvenir más o menos remoto, todas estas tierras que están excluidas, acaso puedan dedicarse a un cultivo intensivo...

Sr. Martínez. — Cuando el país tenga 50 millones de habitantes.

Sr. Serrey. — A eso vamos a llegar y es a lo que tiende la ley.

Sr. Martínez. — Pero somos realistas.

Sr. Serrey. — Se fomentará la inmigración y se radicarán familias enteras en esas regiones subtropicales, que son las que producen frutos naturales, que tienen más fácil aceptación en el mercado. No vamos a limitarnos a ser toda la vida productores de trigo, de maíz o de avena, si no va a resultar un problema de superproducción de esos productos.

Sr. Martínez. — Yo desearía que el señor senador por Salta me dijera qué clase de cultivo se va a obtener en esas regiones.

Sr. Serrey. — Algodón, arroz...

Sr. Martínez. — ¿El algodón bajo riego?

Sr. Arrieta. — Claro, señor senador, bajo riego.

Sr. Martínez. — ¿Y el cultivo del arroz, que ha sido suprimido en alguna provincia porque difunde el paludismo?

Sr. Serrey. — ¡Pero tantos cultivos se pueden hacer!

Sr. González Iramain. — Pido la palabra.

Yo voy a hacer otra observación al inciso que propone el señor senador por Salta, que espero la escuche con buena voluntad porque traduce una pequeña alarma por las consecuencias posibles de este inciso propuesto por el señor senador.

El ha dicho que eso tiende a incluir esas regiones, —seguramente ha pensado en Salta— tan nutridas de bosques riquísimos; y es, precisamente por eso, que quisiera que no se votara el inciso. Si hubiera el modo de excluir de la colonización toda la parte boscosa del país, yo lo proponería, señor presidente, por las razones que sobran ante el criterio ilustrado de los señores senadores.

Está a consideración del Congreso un proyecto de ley enviado por el anterior Poder Ejecutivo, que se refiere, precisamente, a la replantación del país, que es una necesidad angustiosa. Todo hombre que recorre el interior del país, echa de menos y se conmueve ante la voracidad con que se ha arrasado con todos los bosques y los viejos árboles que daban belleza y riqueza al suelo argentino.

Sr. Martínez. — Ya se ha referido a eso el señor senador por la Capital.

Sr. González Iramain. — Si vamos a presentar como tierras colonizables, previo el desmonte del caso, las tierras a que el señor senador por Salta se refiere, creo que más que un beneficio vamos a producir un daño enorme.

Sr. Palacios. — He pedido que se suprima el artículo 66, que entrega precisamente al Consejo Agrario Nacional esas tierras.

Sr. González Iramain. — No lo sabía, señor senador, y me alegro.

Sr. Martínez. — Le hice una interrupción cuando hablaba, señor senador por La Rioja, haciéndole presente que el señor senador por la Capital ya se había referido justamente a eso.

Sr. González Iramain. — Si para el señor senador por Salta valen como sugestión las palabras que acabo de pronunciar, creo que no insistirá en que las regiones a que se refiere, —y que conozco por haberlas visitado juntos— se incluyan en la ley, porque no tienen nada que ganar con la colonización.

Sr. Serrey. — Yo no pido que se talen los bosques.

Sr. González Iramain. — Esa sería la consecuencia.

Sr. Serrey. — Y otra cosa más: hay tierras que tienen bosques sin importancia, pero que es necesario extirpar. Se podría, en todo caso, suprimir las palabras: «aun siendo boscosas». La principal observación se relaciona con el asunto del riego artificial, que no se prevé en este artículo. Se habla de coeficiente de lluvias, pero donde no las hay se hace necesario regar la tierra para que produzca. Entonces, no se puede eliminar esta enunciación, porque en esa

forma se elimina a muchas provincias, incluso la que representa el señor senador.

Sr. Landaburu. — Las últimas palabras del señor senador por Salta me hacen ver que es posible una transacción entre los opuestos conceptos que se acaban de exponer con respecto a la conveniencia de sancionar su agregado. El ha dicho que podría eliminarse las palabras «aunque fuesen boscosas», porque su propósito no es propender directamente a colonizar las tierras con bosques, lo que pondría a la comisión en contradicción con lo que ya ha anticipado, o sea su propósito de supresión del artículo 66. En consecuencia, el señor senador por Salta podría limitar su agregado a la segunda parte, que significa esencialmente esto: no rechazar *in limine* la posibilidad de colonizar tierras que puedan tener riego artificial.

Sr. Martínez. — Pero con un canon barato.

Sr. Landaburu. — Como se trata de una simple facultad, y es de creer que no la va a ejercitar el Consejo Agrario arbitrariamente...

Sr. Martínez. — ¿Para qué la vamos a poner?

Sr. Serrey. — Para no excluirlas esas tierras.

Sr. Landaburu. — Podría ser conveniente colonizar esas tierras. No veo la razón de cerrar la puerta totalmente a esa posibilidad. No he podido consultar a la comisión sobre este punto.

Sr. Suárez Lago. — La comisión siempre está de acuerdo con el pensamiento del señor senador.

Sr. Landaburu. — Muy complacido y muy agradecido, señor senador por Mendoza. Entonces, la comisión expresa, por mi intermedio, que, con esa limitación, a que me he referido, aceptaría el agregado propuesto por el señor senador por Salta.

Sr. Martínez. — Y me imagino que aceptará una modificación referente a los recursos.

Sr. Arrieta. — Es muy posible que el miembro informante de la comisión no tenga presente en este momento las palabras con que termina la moción del señor senador por Salta, y, según las cuales, el Consejo Agrario se convertiría en constructor de obras de riego.

Sr. Martínez. — Así es.

Sr. Arrieta. — Ese es el aspecto que yo creo que no debemos autorizar, porque las obras de riego son, generalmente, tan costosas, que no habría posibilidad de atenderlas con los recursos, ya escasos, con que se dota al consejo. De la discusión realizada con motivo de la propuesta del señor senador por Salta, me parece que lo útil que queda como saldo son las palabras que acaba de pronunciar el señor senador por San Luis, miembro informante de la comisión,

es decir, que se autoriza al consejo a colonizar también las tierras en las cuales los cultivos deban hacerse bajo riego. Si no incorporamos este concepto, tales tierras quedarían al margen de la posibilidad de ser colonizadas, lo cual afectaría a una gran cantidad de provincias, como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Todas ellas quedarían fuera de la acción colonizadora del consejo, lo cual no es aceptable. Hay tierras en esas regiones situadas cerca de las capitales o de los grandes pueblos, donde hay centros de consumo adecuados para absorber la producción local, donde convendría hacer colonización para cultivos diversos, como ser, frutales, hortalizas, granjas en general, y si dejáramos el artículo 9º tal como vino proyectado, el Consejo Agrario Nacional no podría hacer colonización en esas tierras dotadas de riego o susceptibles de ser regadas. Yo creo que podríamos obviar el inconveniente reconsiderando el inciso e) y agregando en él que la colonización también podrá hacerse en tierras bajo riego.

Sr. Serrey. — Podría quedar así: «posea total o parcialmente riego artificial o sea posible dotarlo de él».

Sr. Arrieta. — Me parece aceptable.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿La comisión acepta?

Sr. Landaburu. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso propuesto.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Martínez. — Hago constar de que voto la primera parte: «posea total o parcialmente el riego artificial»; pero no la dotación que nos promete el señor senador por Salta.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Corresponde votar como párrafo aparte el segundo párrafo del inciso a) propuesto por el señor senador por La Rioja.

—Se lee:

Sólo por razones especiales que se expresarán en cada caso, el consejo podrá resolver la adquisición de inmuebles a mayor distancia que las mencionadas.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. González Iramain. — Corresponde votar ahora el agregado a ese párrafo que se ha votado, y que dice así: «y aunque no tengan todas las condiciones enumeradas en este artículo». Lo ha aceptado la comisión.

Sr. Presidente (Patrón Costas). -- Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por La Rioja y aceptado por la comisión.

Sr. Arrieta. — Este agregado anula prácticamente todo el artículo 9º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 10. — La adquisición de las tierras se hará por licitación pública en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con aprobación del Poder Ejecutivo o en remate público, cuando dentro de las condiciones que se establecen por esta ley, fueran ofrecidas en esta forma.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

Artículo 11. — En ningún caso el Consejo Agrario Nacional podrá adquirir tierras de particulares o de instituciones privadas, en otra forma que las expresadas en el artículo 10, cuyos requisitos no regirán para cuando la compra se efectúe a instituciones del Estado.

—Sin observación se aprueba.

—Se lee:

CAPÍTULO IV

Expropiación de inmuebles para la colonización

Artículo 12. — En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas en el artículo 8º para entregarlas a la colonización, queda facultado para realizar su expropiación con la aprobación previa del Poder Ejecutivo de la que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto, se declara de utilidad pública la tierra que el Consejo Agrario Nacional con la aprobación del Poder Ejecutivo juzgue preciso incluir en los planes colonizadores.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

En este artículo se acuerda al Consejo Agrario la facultad de expropiar tierras cuando no pueda adquirirlas por los otros medios que el despacho establece.

El artículo no es, a mi juicio, suficientemente claro. Voy a proponer entonces, una pequeña modificación en su redacción, tendente a aclarar el espíritu que ha generado su inclusión.

De acuerdo con el texto de los artículos ya votados y con los propósitos claramente enunciados por el señor senador por San Luis, doctor Landaburu, el Consejo Agrario Nacional deberá buscar las tierras necesarias para colonización, primeramente en las tierras fiscales que se consideren aptas; después, entre las que

los bancos oficiales e instituciones también oficiales, posean y tengan las condiciones requeridas para aquel objeto. En tercer lugar, las que pueda adquirir de los particulares por los procedimientos que establece el artículo 10, es decir, por licitación pública o en remate público. Recién, entonces, si el Consejo Agrario, después de agotar estos procedimientos, se encuentra con que no tiene tierras suficientes para cumplir su función colonizadora podrá echar mano, como último recurso, a la expropiación. Creo que éste es el concepto con el cual se ha articulado esta ley y por eso es que desearía verlo reflejado con absoluta claridad en el artículo 12.

Por ello, propongo una ligera modificación al encabezamiento de este artículo: que en vez de decir: «En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas en el artículo 8º», diga así: «En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierra suficiente del origen indicado en los incisos a), b) y d) del artículo 8º, o en la forma especificada en el artículo 10, queda facultado para realizar, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la expropiación de la que, llenando las condiciones del artículo 9º, sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley.»

En el segundo párrafo del artículo propongo una ligera modificación de forma. En vez de facultar al Consejo Agrario Nacional a ser él el que declare la utilidad pública de las tierras a expropiar, creo que es más propio que sea el Poder Ejecutivo el que haga esa declaración, naturalmente, que a propuesta del Consejo Agrario. De manera que el último párrafo del artículo 12 quedaría así: «Con este objeto, se declara de utilidad pública la tierra que el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Agrario Nacional, juzgue preciso incluir en los planes de colonización.»

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

El sentido y el propósito evidente del despacho, traducido en sus disposiciones, es el que acaba de señalar el señor senador por Jujuy. El Consejo Agrario Nacional procederá gradualmente a cumplir el plan de colonización. Empezará por las tierras fiscales de propiedad de la Nación y, conjuntamente, con las tierras de las entidades autárquicas que pueden adquirir de acuerdo con el despacho. Cuando esas tierras no fueran suficientes para realizar con amplitud y con eficacia el plan de colonización, apelará a las compras a particulares por los mé-

todos que indica el artículo 10 y, no siendo todavía suficientes, apelará a la expropiación.

Siendo así, no hay ningún inconveniente en aceptar la redacción que propone el señor senador por Jujuy para la primera parte, no así para la segunda, porque, de acuerdo con lo que él propone, se limita la autonomía del Consejo Agrario Nacional. Es cuestión de graduación; prácticamente es lo mismo. El Consejo Agrario declara la utilidad pública, previa aprobación del Poder Ejecutivo o que el Poder Ejecutivo declara la utilidad pública a propuesta del Consejo Agrario Nacional. En ambos casos, la voluntad de esas dos entidades tiene que concurrir exactamente en la calificación de la utilidad pública.

Sr. Arrieta. — Ya he dicho que la modificación del segundo párrafo obedecía a una simple cuestión de forma. Me parece un tanto impropio que sea el Consejo Agrario Nacional el que declarara la utilidad pública de una tierra y que luego el Poder Ejecutivo pudiera desaprobar esa declaración.

Sr. Landaburu. — La declaración de utilidad pública la hace el Congreso, la ley misma. La aplicación de ese concepto es lo que hace el Consejo Agrario. Lo mismo sucede en una cantidad de leyes de expropiación en las cuales se delega a ciertas entidades o reparticiones públicas la determinación de los casos que han de ser materia de utilidad pública. Así sucede con la ley de vialidad, con la Municipalidad de la Capital y con otras leyes que confieren esa facultad a esas entidades o personas autárquicas.

Sr. Arrieta. — Más propio sería que fuera el Consejo Agrario Nacional el que propusiera cuáles tierras deben ser expropiadas y que el Poder Ejecutivo lo declarara así. Pero, como digo, es ésta una simple cuestión de forma sobre la cual no hago cuestión. Retiro, pues, mi indicación referente al segundo párrafo que quedaría entonces como está en el despacho.

—Se lee:

Artículo 12. — En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierra suficiente del origen indicado en los incisos a), b) y d) del artículo 8º, o en la forma especificada en el artículo 10, queda facultado para realizar, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la expropiación de la que, llenando las condiciones del artículo 9º, sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto, se declara de utilidad pública la tierra que el Consejo Agrario Nacional con la aprobación del

Poder Ejecutivo juzgue preciso incluir en los planes colonizadores.

—Se vota y aprueba.

—Se lee:

Artículo 13. — La expropiación de tierras debe referirse a las que en el momento de efectuarse no fueran objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por sus propietarios o a extensiones de tierra que exceda de mil hectáreas de superficie.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Creo conveniente, señor presidente, concordar el criterio de este artículo, respecto a las tierras expropiables, con lo que dice el artículo 15.

Este artículo 13 declara expropiables las tierras que en el momento de efectuarse la expropiación no fueran objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por sus propietarios, etcétera, y el artículo 15 se refiere a los predios abandonados o no explotados por sus propietarios.

Sr. Landaburu. — Son dos cosas distintas, señor senador.

Sr. Laurencena. — No veo la diferencia.

Sr. Landaburu. — Sí, señor senador, se trata de dos casos completamente distintos, y cuando llegue la oportunidad de discutir el artículo 15 lo voy a demostrar.

Sr. Laurencena. — No he percibido la diferencia que hay entre esos dos casos.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Voy a proponer una modificación respecto a la extensión de la tierra que debe ser expropiada.

Durante el debate, en este recinto, y en la Cámara de Diputados, se ha hablado sobre latifundio, que es un concepto sumamente relativo, porque una extensión de tierra en una parte del país puede ser un latifundio, y la misma cantidad en otra, ser absolutamente distinto.

Por otra parte, como lo he dicho al tratarse este asunto en general, nuestro Código Civil es esencialmente colonizador, y al establecer el sistema de la herencia la legitima.

Yo creo, entonces, para no volver sobre argumentos que ya se han hecho, que sería menester llegar a un sistema, diríamos, transaccional, entre la tierra que va a estar sujeta a este régimen de expropiación y la que va escapar al mismo, y pediría al señor miembro informante de la comisión que aceptara una superficie: la de dos mil hectáreas, en vez de mil.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Como ha dicho muy bien el señor senador por Córdoba, el concepto del latifundio es muy relativo, y lo que constituye latifundio en una región, en un país, en un cultivo determinado, puede no constituirlo en otro.

Hay algunas leyes y proyectos que señalan una superficie de dos mil hectáreas. Tenemos, por ejemplo, la ley de Entre Ríos, número 2.985, que fija ese límite de dos mil; tenemos el proyecto de ley de Córdoba, del año 1936, que fija también dos mil. Son dos provincias en las que hay una colonización intensa y hay que creer que los hombres que las han sancionado o proyectado han de tener un concepto muy aproximado a la realidad sobre estas cosas. Siendo así, la comisión no tiene inconveniente en aceptar la modificación al despacho que sugiere el señor senador por Córdoba, elevando la cifra de mil a dos mil hectáreas.

Sr. Laurencena. — Quisiera que el señor senador tuviera la gentileza de aclararme ahora la duda y no esperar hasta que se discuta el artículo 15.

Sr. Landaburu. — El artículo 15 se refiere a los inmuebles abandonados durante el término de cinco años, que no sean de jurisdicción municipal, autorizando en esos casos la expropiación por el Consejo Agrario Nacional, sin sujeción a la condición que se exige en otros casos para usar el remedio extraordinario de expropiación.

Sr. Laurencena. — Pero el artículo 13, señor senador, no tiene ninguna restricción; se refiere a todas las tierras.

Sr. Landaburu. — Pero está vinculado a los otros artículos del despacho que acabamos de votar, sobre todo al 12, que dice que se apelará a ese recurso con respecto a tierras aptas, cuando no sean suficientes las que están en manos de entidades autónomas.

Sr. Arrieta. — Es decir que se refiere a tierras que llenen las condiciones del artículo 9º.

Sr. Landaburu. — Todas las tierras privadas que se expropian tienen que reunir las condiciones del artículo 9º.

Sr. Arrieta. — Según el texto del artículo 15, no es así.

Sr. Laurencena. — ¿Cómo no va a ser así si todas las que se expropian deben reunir esas condiciones?

Sr. Landaburu. — Se insiste en creer que este despacho limita la expropiación y colonización sólo a las tierras a que se refiere el artículo 9º. El artículo 10 se refiere a esas condiciones.

El 15 es un artículo que excepcionalmente, tratándose de tierras abandonadas, por las que se dará posiblemente muy poco precio, autoriza también a expropiarlas cuando fuese necesario para cumplir el plan de colonización.

Sr. Laurencena. — Pero no es excepcional.

Sr. Landaburu. — Ese es el sentido que tiene el despacho.

Sr. Laurencena. — Se dice que toda tierra que no esté racionalmente explotada por su propietario, es expropiable. Es evidente que una tierra abandonada no está racionalmente explotada por su propietario y entonces está comprendida en esa disposición.

Sr. Landaburu. — El artículo 13 se refiere a las tierras especialmente aptas.

Sr. Laurencena. — ¿Y éste a las tierras inaptas?

Sr. Landaburu. — El artículo 15 se refiere a las tierras abandonadas, pero sin exigir todas las condiciones del artículo 9º. Se trata de tierras abandonadas que el Consejo Agrario Nacional puede creer aptas o relativamente aptas para determinados motivos de colonización, para determinados cultivos...

Sr. Laurencena. — Es una interpretación del señor senador, pero no está en el artículo.

Sr. Landaburu. — Tratándose de tierras abandonadas, de tierras ociosas, como dice la ley de México, ¿por qué van a estar exentas de la jurisdicción del Consejo Agrario Nacional para que éste pueda adquirirlas?

Sr. Arrieta. — El artículo 13 estaría claro si se agregara que la expropiación de tierras a que él se refiere es la autorizada en el artículo 12.

Sr. Martínez. — Es evidente.

Sr. Arrieta. — Pero el señor senador por Entre Ríos no lo ha entendido así, y es lógico que tenga la duda.

Sr. Landaburu. — Lo dice el artículo 12 que acabamos de sancionar.

Sr. Arrieta. — Para evitar esa duda, se puede redactar el artículo 13 en esta forma: «La expropiación de tierras autorizada por el artículo anterior, debe referirse...»

Sr. Landaburu. — No hay ningún inconveniente.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo con el agregado propuesto por el señor senador por Jujuy y aceptado por la comisión.

—Se lee:

Artículo 13. — La expropiación de tierras autorizada por el artículo anterior debe referirse a las que en el momento de efectuarse no fueran objeto de una explotación agraria racional verificada directamente

por sus propietarios o a extensiones de tierra que excedan de dos mil hectáreas de superficie.

—Se vota y resulta afirmativo.

—Se lee:

Artículo 14. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, que se declara de interés público, se fijará con sujeción a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos, teniendo también en cuenta la de los terrenos similares contiguos;
- b) Y al valor de su producción apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Antes de que se vote el artículo 14, necesito hacer a su respecto, algunas aclaraciones que al principio consideraba útiles y que hoy reputo indispensables.

Por algunos agregados que propuso a él el señor senador por Salta, doctor Serrey; por algunos reparos que escuché en la sesión anterior al señor senador por Córdoba, doctor Martínez, y creo que al señor senador por Jujuy, ingeniero Arrieta, he comprendido que los señores senadores no asignan al artículo 14 el sentido y el alcance que tiene para la comisión y que puede por ese motivo ser necesaria una aclaración y aun un agregado que disipe toda duda a este respecto, tratándose, como se trata, de una disposición de carácter fundamental.

No voy a renovar el debate en lo que se refiere a la expropiación, porque han sido votados ya los preceptos que la autorizan. Pero para que el Senado tenga la filiación exacta de este artículo y pueda comprender bien las manifestaciones que haré en seguida, necesito recordar el debate en la Cámara de Diputados, a fin de establecer el origen y las modificaciones de este precepto.

Durante el debate en general, el capítulo de la expropiación fué impugnado por el diputado Infante, quien discutió la constitucionalidad del mismo y discutió también la conveniencia de establecer o fijar normas o bases en el texto de la ley para apreciar, con sujeción a ellas, el monto de la indemnización.

Fué también impugnado por el diputado Pizarro, que entendía que era una delegación indebida de facultades que hacía el Congreso al Consejo Agrario Nacional y que estaba también en contra de la fijación de normas, si bien, refiriéndose a éstas, él encontraba preferible la que

se funda en la valuación fiscal y no la que se funda en la productividad de la tierra.

El despacho fué defendido por el miembro informante de la comisión, diputado Palacio, por los diputados Horne, Anastasi, Ravignani, Acuña y otros, quienes demostraron no solamente su constitucionalidad, sino la conveniencia de autorizar el procedimiento de la expropiación en esta ley de colonización agrícola, y aun de incluir en su texto de determinación de las normas o bases para la indemnización al propietario.

El despacho originario de la Comisión de Legislación Agraria, decía: «Siendo de interés público el cumplimiento de la presente ley, la indemnización al propietario de las tierras en el caso de que les fuera expropiada por mediar las circunstancias a que se refiere el artículo 12, no podrá exceder de la que surja de su valor en relación con el de su producción, apreciada en los últimos diez años precedentes al de la expropiación y con prescindencia de todo otro factor que pueda determinar una apreciación distinta.»

Como se ve, no solamente se fijaba una norma, sino que se recalca de modo especial la exclusión de todo otro motivo concurrente para establecerla.

El señor diputado Maino propuso que se aceptara esa base, con un agregado del 10 por ciento del precio de las tierras como monto total de la indemnización.

Por fin, después de un debate amplio al respecto, se aceptó una segunda norma para la fijación del precio, propuesta por el diputado Ravignani, según la cual, al criterio de la productividad de la tierra se agregaba el de la valuación fiscal, tal como él ha quedado sancionado en la Cámara de Diputados.

La Constitución, en su artículo 17, sólo establece dos requisitos para la legalidad de esta medida: que la utilidad pública sea calificada por el Congreso y que la expropiación sea previamente indemnizada. La ley número 189, con un criterio poco evolucionado, todavía contiene otras exigencias extrañas al texto constitucional; tal, por ejemplo, como la del artículo 29, que dice que en «cada caso» debe tenerse la declaración de la utilidad pública y la del artículo 39, que exige planos e informes descriptivos para delimitar con toda precisión el terreno o la cosa a expropiar.

Estas exigencias, como no pertenecen al texto constitucional, se pueden derogar en cualquier momento por una ley general o especial, y lo han sido en casi todos los casos posteriores a la ley número 189.

Así, la ley número 24, de 1855, autoriza la

construcción de un ferrocarril de Paraná a Córdoba, inclusive una legua de tierra a cada lado de la vía, sin mencionar siquiera el destino de esa faja ni invocar tampoco las razones de utilidad pública. La ley número 33, de 1863, que se limita a un artículo, dice que se aprueba el convenio celebrado por el Poder Ejecutivo con el concesionario del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Sobre esas leyes han recaído los fallos de la Corte a que me he referido en la sesión anterior, declarándolas perfectamente constitucionales.

La ley número 2.003 autorizando la construcción del Ferrocarril Central Argentino desde Cañada de Gómez hasta Las Hierbas, establece que los planos deberán ser aprobados a posteriori por el Poder Ejecutivo, en el plazo de seis meses y que las empresas expropiarán por su cuenta los terrenos necesarios; y por fin, la ley número 8.854, que se refiere a las expropiaciones de los terrenos necesarios para la diagonal Norte y la número 8.855, referente a la expropiación de terrenos para la construcción de la avenida de Norte a Sur, autorizan a la municipalidad a expropiar, sin que esto signifique una delegación de facultades, como se insinuó hace un instante, no sólo para la construcción de esas vías de comunicación, sino también de las franjas laterales que puede vender a terceros.

Lo que quería decir al Senado es: que la fijación de las normas o bases estimativas del precio, no sólo no constituye una disposición inconstitucional, sino que se ha seguido en muchas leyes argentinas, y son en muchos casos de indudable conveniencia para evitar la arbitrariedad del criterio judicial, que en nuestro país ha llegado en algunos casos a verdaderos abusos.

Conocemos los resultados de algunas expropiaciones; conocemos los procedimientos que se siguen de acuerdo o al margen de la ley número 189: el juez, sin norma alguna, fundado en esta ley y sin moverse de su despacho, libra en muchos casos la solución del asunto al dictamen de peritos, y los peritos, en lugar de actuar como auxiliares de la justicia, actúan como apoderados de las partes, llevando las tasaciones a extremos realmente exagerados. Eso, como ha dicho el señor miembro informante en la Cámara de Diputados, es lo que se quiere evitar con la fijación de normas de la ley, y de ninguna manera se pretende con ello negar al expropiado el derecho a una equitativa o justa indemnización.

La misma ley de expropiación número 189, contiene normas en sus artículos 15, 16 y 17. El Poder Ejecutivo acaba de proponer una sustitu-

ción general de la ley de expropiación y en su proyecto de 1938, también se fijan normas para estimar el precio de la cosa en los artículos 8º a 11.

El proyecto del ex ministro Le Breton, sobre colonización, presentado en 1924, también contenía normas estimativas del precio, entre las cuales figuraban la valuación fiscal y la productividad y renta de la tierra.

La comisión, señor presidente, —y entro ya a lo esencial— ha tocado la sanción de la Cámara de Diputados, para mejorarla, introduciéndole una doble modificación.

La primera se funda en que, si bien la valuación fiscal y la productividad de la tierra, únicas bases aceptadas en la sanción de la otra Cámara, pueden ser justas para apreciar solamente el valor de la tierra, en muchos casos no comprenderá toda la indemnización que legalmente es debida al expropiado.

La valuación fiscal para el pago de los impuestos, en primer lugar, puede responder a criterios distintos, como que se hace por el gobierno nacional y por los 14 gobiernos de provincia, según la jurisdicción en que estén situadas las respectivas tierras. Puede ser alcista o bajista ese criterio, según el caso. En algunas provincias, como lo han recordado los señores senadores por Córdoba y Entre Ríos, se efectúa la valuación de la tierra libre de mejoras, de tal modo que ningún accesorio de la misma estará incluido en las bases, que sólo se fundan en la valuación de la tierra y su productividad.

La segunda de las modificaciones introducidas por la comisión consiste en decir, con referencia a la valuación fiscal, que se tendrá también en cuenta la de los terrenos similares contiguos, para evitar los casos de valuación por complacencia o abusivos, que recordó perfectamente el señor senador por Córdoba en el debate en general.

De ese modo, se tendrá en cuenta la valuación de la tierra expropiada y también la de las tierras similares contiguas, dando a la expropiación una base más justa y más amplia, y compensando la diversidad y las contradicciones relativas entre los criterios que hayan inspirado una y otra.

De manera, señor presidente, que según el artículo 14 del despacho que está en debate, las normas o bases se refieren exclusivamente al valor de la tierra. Por eso, la comisión ha substituido las palabras «la indemnización al propietario de la tierra», por las palabras «el precio de la tierra» que se expropie en cumplimiento de esta ley, que es distinto.

Para demostrar que ése es el criterio que inspira el despacho, basta ver que un artículo posterior, el 16, que se refiere también a expropiaciones, dice: «El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.»

En ninguna parte dice el despacho que queda derogada la ley general de expropiación número 189.

Todo esto quiere decir que la indemnización que corresponde por las expropiaciones autorizadas por esta ley, son con respecto a la tierra. El precio de ésta se fija sobre esas bases o normas de criterio, sin perjuicio de agregar a su monto el que corresponda de acuerdo con los principios y la ley general de expropiación, a los daños o perjuicios que sean consecuencia forzosa de la ocupación de las tierras por el Consejo Agrario Nacional, sin incluir en él los valores especulativos o afectivos, ni las ganancias hipotéticas, que es esencialmente lo que queremos evitar.

Para desvanecer toda duda a este respecto, la comisión propone que se considere y que se vote como parte integrante del artículo 14, el siguiente agregado: «La indemnización comprenderá, además del valor de la tierra, el de los perjuicios que el expropiado probare y que fueren consecuencia forzosa de la ocupación, excluyéndose en todos los casos, los valores especulativos y afectivos y los daños y ganancias hipotéticos. El valor total de los perjuicios en ningún caso excederá del 20 % del precio atribuido a la tierra. En todo lo demás, la expropiación se regirá por la ley general vigente.»

Esa ley puede ser la 189 o la que ya ha proyectado el Poder Ejecutivo el año 1938, o cualquier otra que rija mientras esté en vigor la ley de colonización.

Nada más.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

No sé si en la inteligencia del señor senador está una posibilidad que surge del inciso que la Cámara ya ha aprobado, y es ésta: la de tomar en cuenta para la estimación de la tierra, el valor que puede representar la posibilidad de disponer de agua de riego, porque entre dos propiedades, una que pueda disponer de agua y otra que no pueda hacerlo, hay una diferencia de valor inmensa, desde el momento que la que no dispone de agua de riego será inútil para la agricultura y en cambio será muy útil la otra. No puede hablarse de la estimación, porque se puede tratar de tierras que no han sido cultivadas. Quedaría como único elemento de juicio la valuación fiscal, que puede responder a nor-

mas que no sean de estricta justicia. De manera que el criterio que conviene tomar en cuenta es el valor que puede representar la posibilidad de agua para riego.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

El señor senador por Salta había entregado, como dije, a la comisión, redactado por él, el agregado que proponía al artículo, que es un agregado parcial, pues se limita a la posibilidad de que las tierras expropiadas tengan bosques.

Sr. Serrey. — No hablo de bosques.

Sr. Landaburu. — Que tengan posibilidad de riego. La comisión debe manifestar que sólo puede aceptar, fuera del precio de la tierra con arreglo a las bases del artículo 14, los perjuicios que vengan como consecuencia forzosa, concepto amplio que quedará librado a la apreciación judicial.

Sr. Serrey. — Este no es un caso de perjuicios, es un caso de diferencia de valor. Los senadores que conozcan tierras de regadío saben muy bien la diferencia enorme...

Sr. Landaburu. — Si no entra en los perjuicios, entraría en el concepto de la valuación fiscal, o de la productividad de la tierra.

Sr. Serrey. — Va a quedar al criterio de la valuación fiscal.

Sr. Landaburu. — No, señor senador; la valuación fiscal y la productividad de la tierra dan el valor de la misma. Los daños, consecuencia forzosa de la expropiación, se refieren a otro concepto, comprensivo también, de las mejoras y obras, que pueden conservarse o destruirse, evitando, como dice expresamente la redacción que he entregado a Secretaría, todo lo que pueda estar comprendido en el concepto de valores especulativos y afectivos, y los daños y ganancias hipotéticas, que ya están excluidos en la ley general de expropiaciones.

Sr. Serrey. — La cuestión es que el inciso b) habla del valor de la producción apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación, pero cuando la tierra no ha sido cultivada, no se puede apreciar la producción.

Yo no quiero insistir más, si la comisión no acepta, pero digo que prescindir de este criterio como base para la expropiación, es cometer una verdadera injusticia.

Sr. Landaburu. — Cuando la ley dice «producción» no se refiere solamente a un hecho ocurrido; es indicativo de productividad.

Sr. Laurencena. — Dice «su producción».

Sr. Serrey. — Pero dice «apreciada».

Sr. Landaburu. — La comisión no tiene inconveniente en que se ponga «productividad», porque hay múltiples razones, como los malos

años agrícolas, que no acusan una producción determinada, y se podría causar un evidente perjuicio al expropiado. El concepto es el de la productividad.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a dar lectura del artículo.

—Se lee:

Artículo 14. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, que se declara de interés público, se fijará con sujeción a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos, teniendo también en cuenta la de los terrenos similares contiguos;
- b) Y al valor de su productividad apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

La indemnización comprenderá, además del valor de la tierra, el de los perjuicios que el expropiado probare y que fueran consecuencia forzosa de la ocupación, excluyéndose en todos los casos los valores especulativos y afectivos y los daños y ganancias hipotéticas. El valor total de los perjuicios en ningún caso excederá del 20 % del precio atribuido a la tierra. En todo lo demás, la expropiación se regirá por la ley general vigente.

Sr. Martínez. — Le pediría al señor miembro informante que antes de las palabras «daños y perjuicios» se agregara la palabra «mejoras», por las razones que di y de las que se hizo cargo al fundar la modificación de este artículo 14, el señor presidente de la comisión.

La valuación para el pago de los impuestos fiscales puede referirse solamente a la tierra libre de mejoras, como ocurre en Córdoba y Entre Ríos, y en ese caso los impuestos no tienen en cuenta más que el valor desnudo de la propiedad sin apreciar las mejoras que puedan haberse introducido en ella y que representan un capital que es justo se indemnice cuando se desapodera al dueño de la tierra.

Con las palabras del señor miembro informante, ha quedado ya claramente establecido que las mejoras deben ser comprendidas en la indemnización, como no podía ser de otra manera, pues, de lo contrario, esta ley adolecería del vicio de inconstitucionalidad, ante la disposición terminante del artículo 17.

Creo que conviene precisar bien el alcance de ese artículo incluyendo la palabra «mejoras».

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

He hecho mérito de algunas sugerencias del señor senador por Córdoba al fundar el agregado que acabo de proponer en nombre de la comisión. Es exacto que en algún caso podrían entenderse excluidas las mejoras de las normas que el agregado mismo encierra, pero para

satisfacer el propósito del señor senador, no sería necesario substituir la palabra «daños», sino agregar las palabras «y las mejoras cuando no estén incluidas en los incisos anteriores.»

Sr. Martínez. — Justamente eso es lo que pedía: que antes de las palabras «daños y perjuicios» se incluyese la palabra «mejoras.»

Sr. Landaburu. — En esta forma: «y las mejoras cuando no estén comprendidas en los incisos anteriores.»

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

Entiendo que la palabra «mejoras» también debe ser incluida a continuación de «el precio de la tierra», es decir que el artículo debía iniciarse así: «El precio de la tierra y sus mejoras...»

Yo, señor presidente, tenía el propósito de impugnar el artículo 14 tal como venía proyectado en el despacho, por considerar que violaba garantías constitucionales claras y explícitamente establecidas. Las palabras que ha pronunciado el señor miembro informante de la comisión, y especialmente la modificación que ha introducido en el artículo me eximen y liberan al Senado del discurso que iba a pronunciar combatiendo este artículo. Estoy ahora de acuerdo con la nueva redacción del artículo 14 porque en él se reestablece el concepto constitucional, de que nadie puede ser privado de su propiedad sin recibir la previa indemnización. Y la indemnización de que habla la Constitución es muy distinta al precio de que hablaba el despacho de la comisión. No necesito explicárselo al Senado. El precio corresponde al valor venal del bien. La indemnización incluye, en cambio, el valor del bien en sí mismo, más el resarcimiento causado por la privación de la propiedad. Como el artículo 14 del despacho, tal como venía redactado, se refería exclusivamente al precio de la tierra a abonarse al propietario desposeído, podría interpretarse en el sentido de que sólo quería abonarse al propietario el valor venal del bien expropiado y que no se le resarciría del daño que se le ocasionaba al privarlo de su propiedad. Felizmente, la comisión ha sido tan amable de aceptar nuestras observaciones y ha accedido a modificar el artículo, introduciéndole el concepto de la indemnización que la Constitución establece.

De manera que ahora estoy completamente de acuerdo con el artículo 14, en su nueva redacción, porque en realidad lo que ahora hace es simplemente establecer normas en cierto modo restrictivas sobre el monto a pagar en las expropiaciones, pero siempre respetando el concepto constitucional de que la propiedad es inviolable y que nadie puede ser despojado de

Julio 24 de 1940

CAMARA DE SENADORES

19ª Reunión. 15ª Sesión Ordinaria

ella sin recibir previamente la justa indemnización, concepto que está contenido además en el artículo 2.511 del Código Civil que no es derogado por este despacho...

Sr. Landaburu. — Pero que puede serlo.

Sr. Arrieta. — Pero que no lo está todavía.

Sr. Landaburu. — Está la ley número 189, que es la que rige las expropiaciones.

Sr. Arrieta. — Según dicho artículo 2.511, justa indemnización es no sólo el pago del valor real de la cosa, sino también el pago del perjuicio directo que le venga al propietario por la privación de su propiedad. De manera que si de acuerdo con la nueva redacción del artículo, para fijar el valor del bien expropiado se va a considerar por un lado el precio de la tierra y el valor de las mejoras que están sobre ella, y por el otro se le agrega después un cierto valor que represente el resarcimiento del daño por la privación de la propiedad. Yo estoy completamente de acuerdo con el despacho, como también lo estaría en aplicarlo en una ley general de expropiación para que no pueda ocurrir en adelante, lo que tan frecuentemente ocurre ahora, que los jueces aprecian con tanto exceso la indemnización a pagar por bienes expropiados.

—Se lee el artículo 14 con las modificaciones propuestas.

Sr. Arrieta. — El señor secretario debe haberse equivocado en la lectura. No es aceptable que se introduzca la palabra «mejoras» antes de la palabra «perjuicios», en el penúltimo párrafo, porque las mejoras pueden en muchos casos tener un valor muy superior al de la tierra.

Sr. Arenas. — Así es.

Sr. Landaburu. — Yo entendía que el señor senador se proponía eso. Por lo demás, señor presidente, niego que tratándose de una ley de colonización agraria, las mejoras puedan en algún caso, valer más que la tierra. Sobre todo tratándose de tierras que el Consejo Agrario elige para colonizar, no va a elegir tierras cuyas mejoras valgan más que la tierra.

Sr. Arenas. — Es cuestión del concepto de la mejora. Tiene mucha importancia el hecho. ¿Cómo estima el señor presidente de la comisión que debe calificarse una tierra con riego? ¿El riego es una mejora?

Sr. Landaburu. — Indudablemente que lo es. Pero el riego de la tierra está incluido en la valuación fiscal, que es la primera base estimativa...

Sr. Arrieta. — Salvo que las obras de riego

se hubieran hecho después de la valuación fiscal y ésta no hubiera sido modificada.

Sr. Landaburu. — Por eso, hemos dicho «cuando no estén comprendidas en los incisos anteriores».

Sr. Arenas. — Esa es una cuestión aparte. Lo que se trata de dilucidar, para no incluir las mejoras en esa estimación, que no puede exceder del 20 % del valor de la tierra, es establecer que son las mejoras.

A mí no me cabe ninguna duda de que el colocar una tierra bajo el regadío es una mejora.

Sr. Landaburu. — Por eso, la comisión no insiste en la palabra «mejoras».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a leer nuevamente el artículo 14 con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se lee:

Artículo 14. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, que se declara de interés público, se fijará con sujeción a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos, teniendo también en cuenta la de los terrenos similares contiguos;
- b) Y al valor de su productividad apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

La indemnización comprenderá además del valor de la tierra y las mejoras cuando no estén comprendidas en los incisos anteriores, el de los perjuicios que el expropiado probare y que fueran consecuencia forzosa de la ocupación, excluyéndose en todos los casos los valores especulativos y afectivos y los daños y ganancias hipotéticas. El valor total de los perjuicios en ningún caso excederá del 20 % del precio atribuido a la tierra. En todo lo demás, la expropiación se regirá por la ley general vigente.

—Se vota y aprueba.

—Se lee:

Artículo 15. — Todo predio rural que no sea de jurisdicción municipal, abandonado o no explotado por su propietario durante el término de cinco años, podrá ser expropiado por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo, debiendo fijarse el monto de la indemnización conforme a las bases establecidas en el artículo precedente.

Sr. Martínez. — Aquí viene la observación del señor senador por Entre Ríos, sobre si todas las tierras ociosas que están sujetas a los preceptos del artículo 15, o solamente las de particulares comprendidas dentro de la zona que puede ser objeto de la colonización, en virtud de las definiciones que da el artículo 99.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Había fijado ya, cuál es el sentido de este artículo en las pocas palabras que pronuncié hace un instante, diciendo que era un caso de excepción: «Todo predio rural que no sea de jurisdicción municipal, abandonado o no explotado por sus propietarios durante el término de cinco años...», etcétera, podrá ser expropiado por el Consejo Agrario Nacional y deberá serlo cuando dicho consejo, procediendo gradualmente, hubiera consumado un plan de colonización de las tierras más aptas y creyera conveniente apelar a esto, lo cual puede hacer, también, para llevar adelante los propósitos de la ley.

Sr. Martínez. — Yo le pediría al señor miembro informante de la comisión de que se circunscribiera el artículo 15, de tierras ociosas, a las tierras que reúnen las condiciones necesarias para ser colonizadas, y que son definidas por el artículo 9º, porque si el propósito que se tiene...

Sr. Arrieta. — En tal caso, el artículo 15 estaría de más.

Sr. Martínez. — No; porque puede haber una tierra ociosa dentro de una tierra colonizable, y entonces es justo el castigo de su propietario. Pero en un país como el nuestro, de costumbres políticas como las que tenemos, no conviene que haya un arma que mañana pueda ser utilizada con fines distintos a los que se tienen al sancionar esta ley de colonización, máxime cuando habrá tierras que, aunque la voluntad de sus propietarios sea hacerlas producir, no puedan hacerlo por no estar en condiciones económicas, o por no tener vías de comunicación, etcétera, y en ese caso, no sería justo que a estas personas se las desposeyera de esas tierras.

Por el contrario, me parece perfectamente justo que cuando un propietario tiene una tierra ociosa en una zona que puede ser colonizada, que esa tierra permanezca así, esperando su valorización por el esfuerzo de la colectividad, no puede aceptarse, y todo lo que tienda a castigar a ese propietario indolente, es de perfecta justicia.

Pero sería peligroso extender esta facultad al resto de las tierras improductivas del territorio argentino restante.

Sr. Arrieta. — Por eso digo que habría que eliminar el artículo 15, porque con el artículo 13 ya está facultado el Consejo Agrario Nacional para expropiar todas las tierras que estén dentro de la zona colonizable.

Sr. Landaburu. — Por eso dije que este es un caso de excepción. Sólo entendiéndolo así se le reconoce algún sentido.

Sr. Martínez. — Es excepcional, pero peligroso.

Sr. Landaburu. — El inconveniente que señala el señor senador por Córdoba no puede tomarse en cuenta frente a las ventajas que ofrece.

No se trata de crear una norma obligatoria, sino de investirlo de la facultad de expropiar esas tierras ociosas, para incluirlas dentro del plan de colonización.

¿Qué cosa mejor puede ocurrirle a un propietario, en el caso hipotético que plantea el señor senador por Córdoba, de que no pudiera, por cualquier razón, cultivar su tierra —por más respetable que ella sea—, que venga el Consejo Agrario y se las pague a un precio razonable para destinarlas a la colonización?

Sr. Martínez. — A eso le responderé con lo que decía el viejo Vélez, que sabía más que todos nosotros: «No solamente la buena fe es posible, sino también mala.»

Sr. Landaburu. — El artículo tiene el sentido que he expuesto, señor presidente. Ya lo he explicado a los señores senadores. Para la comisión tiene un sentido concreto y un sentido útil, sin que ofrezca los peligros que tan anticipadamente quieren verse.

Sr. Laurencena. — El sentido que le da la comisión, es un sentido derivado simplemente de la interpretación que tienen los términos del artículo.

Sr. Martínez. — Es evidente.

Sr. Laurencena. — Pero yo deseaba hacer notar otros errores que a mi modo de ver contiene este artículo, que faculta a los propietarios rurales que tienen abandonadas sus tierras, o no explotadas, a que el Consejo Agrario expropie sus inmuebles de acuerdo con las bases establecidas en el artículo anterior, pagándoseles una indemnización.

Sr. Landaburu. — Porque no puede destinarlos a la colonización.

Sr. Laurencena. — Hablamos de las tierras de cultivo. No se trata de un solar en la avenida de Mayo.

Pero en la ciudad de Buenos Aires hay tierras cultivables que están abandonadas.

Pero hay otra observación que yo deseaba hacer y es la siguiente: dice al principio del artículo 15: «Todo predio rural que no sea de jurisdicción municipal...» En casi todo el país es indudable que están separadas la zona rural de la urbana y la jurisdicción municipal comprende exclusivamente la urbana.

Sr. Martínez. — Menos en la provincia de Buenos Aires.

Sr. Laurencena. — Pero hay provincias como la de Buenos Aires, en que la jurisdicción municipal se extiende a toda la parte rural y de acuerdo con esta disposición, en la provincia de Buenos Aires no habría ningún predio que cayera dentro de este artículo.

Sr. Landaburu. — La comisión aceptará cualquier palabra, como ejido, radio, o cualquier otra, que exprese mejor el concepto del señor senador.

Sr. Laurencena. — Bastaría con que se dijera «todo predio rural abandonado».

Sr. Landaburu. — Para la comisión es suficiente porque la palabra «rural» se entiende como excluyente de las tierras urbanas.

Sr. Martínez. — Ha señalado muy bien el señor senador por Entre Ríos, que hay provincias, como Buenos Aires y Tucumán, donde la jurisdicción municipal se extiende también a la parte rural y entonces quedarían excluidas de las disposiciones de este artículo. Hay que limitar a la palabra ejido.

Sr. Laurencena. — Me permito sugerir a la comisión la supresión de las palabras «que no sea de jurisdicción municipal». Quedaría, simplemente: «Todo predio rural abandonado», etcétera.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta la supresión de esas palabras.

Sr. Martínez. — Yo propondría, señor presidente, que se aclarara el artículo en esta forma: «Todo predio rural que reúna las condiciones del artículo 9º.»

Sr. Landaburu. — Eso se puede votar como un agregado.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo 15, con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

—Se lee:

Artículo 15. — Todo predio rural abandonado o no explotado por su propietario durante el término de cinco años, podrá ser expropiado por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo, debiendo fijarse el monto de la indemnización conforme a las bases establecidas en el artículo precedente.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por Córdoba, en reemplazo de las palabras suprimidas.

—Se lee:

que reúna las condiciones establecidas en el artículo 9º.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Landaburu. — Pido que se rectifique la votación, señor presidente.

Sr. Arrieta. — Hago notar que este agregado significa prácticamente la anulación del artículo 15.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a rectificar la votación.

—Se rectifica la votación y resulta afirmativa de 8 votos.

—Se lee:

Artículo 16. — Cuando el dominio de las tierras sujetas al régimen de esta ley se unifique o refunda de nuevo en un mismo propietario, o cuando se subdividan, sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Subdividir la tierra y entregarla al agricultor es la preocupación que tienen los autores de este proyecto. Pero con eso no basta. Es necesario que el Estado se preocupe de evitar el acaparamiento.

Y para evitar el acaparamiento de la tierra, a mí me parece que el artículo 16 no es lo suficientemente eficaz.

Se propone que: «Cuando el dominio de las tierras sujetas al régimen de esta ley se unifique o refunda de nuevo en un mismo propietario, o cuando se subdividan, sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el Consejo Agrario Nacional, con aprobación del Poder Ejecutivo».

Es decir, que es necesario que se produzca la acaparación de la tierra para recién buscar el remedio. Mejor es prevenir el mal.

Yo le he hecho al señor presidente de la Comisión de Agricultura una sugestión en el sentido de que aceptara un artículo donde se estableciera que todo adquirente de los lotes adjudicados en propiedad, no podría venderlos, enajenarlos, gravarlos o subdividirlos, sin autorización previa del Consejo Agrario Nacional, con informe de los consejos seccionales y locales; y le hacía notar que una disposición de esta naturaleza existía en muchas legislaciones agrarias y aparecía también en el anteproyecto del diputado Horne, que es una persona de verdadera competencia en cuestiones agrarias.

El señor miembro informante, presidente de la Comisión de Agricultura, me habló, enton-

ces, de los inconvenientes que podría presentar el hecho de que el consejo interviniera una vez que los lotes ya habían pasado en propiedad exclusiva a los adquirentes.

El argumento no es muy decisivo, porque el despacho de la comisión dice en el artículo 19 que la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, de acuerdo al interés colectivo. Y es evidente que en este caso el interés colectivo estaría comprometido si los lotes que se han entregado a agricultores aptos, de verdadera competencia, por mil situaciones especiales, pasaran a especuladores y hubiera que volver a expropiarlos.

El señor miembro informante, doctor Landaburu, sin embargo, comprendiendo que había un fondo de verdad en esta proposición, me dijo que él aceptaría una redacción en el sentido de que se estableciera que los adquirentes no podrían vender la tierra sino a agricultores que se encontraran en la misma situación determinada por la ley, con el beneplácito del Consejo Agrario.

Yo no tendría ningún inconveniente en aceptar esa modificación a la proposición que había hecho al señor presidente de la comisión, pero entiendo que debemos reflexionar sobre la necesidad imperiosa de que la ley no resulte ineficaz, de que después de unos cuantos años en que habremos hecho verdaderos sacrificios para entregar la tierra en pequeña propiedad a agricultores aptos, resulte que han vendido su tierra y esté en manos de especuladores.

Alguna medida habría que tomar. Si no se acepta la proposición tan terminante de que se exija para la gravación, la venta y la subdivisión, el beneplácito o el visto bueno del Consejo Agrario, por lo menos, que se haga esa manifestación a que se refería el señor presidente de la comisión.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Efectivamente, el señor senador por la Capital, en el curso del debate en general, y posteriormente en conversaciones privadas, me ha sugerido la conveniencia de introducir una modificación en el sentido que acaba de expresar.

El artículo 16 del despacho prevé el caso de que las tierras sujetas al régimen de la colonización, establecido por esta ley, después de cumplidos los contratos se unifiquen en manos de un mismo propietario, llegando a constituir, en cierto modo, nuevos latifundios cultivados. Para evitar ese resultado autoriza al Consejo Agrario Nacional a expropiar esas tierras, redistribu-

yéndolas nuevamente en la misma forma que lo había hecho al principio. El artículo 16 está relacionado, bajo este concepto, con el artículo 33, que dice: «Los compradores que no hayan pagado todo el precio o transferido el saldo de la deuda del Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar sus derechos al predio sin previo consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Los arrendatarios con opción de compra tampoco podrán, sin igual requisito, ceder sus arrendamientos o subarrendar. El consejo deberá pronunciarse dentro de treinta días de formulado el pedido correspondiente.

«Toda enajenación del predio o cesión o subarriendo hecho sin consentimiento del consejo, es nulo de pleno derecho.»

El despacho prevé entonces, y sanciona con la nulidad, toda operación que tienda a disponer de la tierra, sea a título de venta, arrendamiento o sublocación, mientras esté vigente el contrato, pero una vez que el contrato ha sido cumplido y que ha sido pagado todo el precio, no ha considerado conveniente mantener esa situación de indisponibilidad. Estas tierras, señor presidente, se pagan a plazos largos. Aceptando la hipótesis de que el 50 % se transfiera al Banco Hipotecario Nacional, no se pagarían en menos de 25 ó 30 años. Me parece, pues, que sería ir demasiado lejos, establecer con posterioridad a ese plazo una prescripción que prive al agricultor o colono de vender sus propiedades.

Sr. Palacios. — Yo no propongo semejante cosa, que sería un absurdo.

La relación de que habla el señor miembro informante no existe porque en un caso se trata del propietario y en otro, del que todavía no lo es. Yo no he propuesto, de ninguna manera, que se le prive de su propiedad al agricultor, lo que sería, repito, absurdo. Me baso en un artículo del proyecto, que crea un nuevo régimen jurídico, por lo mismo que los precios de venta son moderadísimos, lo que permite instituir ciertas obligaciones contractuales que no son las comunes. El propósito, señor miembro informante, es el de evitar un procedimiento largo con la nueva expropiación, y me permito indicarle que cuando le hice la sugestión a que me refiero, la aceptó.

Sr. Landaburu. — El señor senador me suele favorecer a veces con conversaciones o proposiciones en antesalas.

Sr. Palacios. — Si al señor senador no le hacen las sugestiones antes de entrar al recinto, se enoja, como sucedió ayer, y cuando se le hacen en antesalas, también se enoja. Franca-

mente, es una actitud curiosa la del señor senador.

Sr. Landaburu. — La he meditado sin enojo, y fruto de esa meditación es mi opinión adversa.

Sr. Palacios. — Si me hubiera avisado el señor senador antes de entrar al recinto, no hubiera dicho que él la aceptaba.

Sr. Landaburu. — Lo menos que puedo hacer es darle al señor senador los motivos que tengo para no aceptar la proposición que me ha hecho, aunque con muy buena voluntad le he aceptado otras. Además, el Senado puede aceptarla a despecho de la comisión; pero el señor senador no puede molestarse en lo más mínimo porque estemos en discrepancia en este caso.

Sr. Palacios. — Muy bien.

Sr. Landaburu. — Decía, señor presidente, que la comisión cree sinceramente, que esa exigencia de la previa autorización del Consejo Agrario Nacional para enajenar las propiedades, después de cumplido el contrato, puede constituir una seria rémora a la colonización. Puede ser un motivo que induzca a los adquirentes a pensar mucho antes de comprar un lote, que no sólo les impone el pago del precio en las condiciones del despacho, sino que con posterioridad no les dé la libertad de enajenarlo sin previo asentimiento del Consejo Agrario Nacional.

La comisión cree, señor presidente, que puede producir ese resultado y por ese motivo considera que es suficiente prohibir las enajenaciones, arrendamientos y las sublocaciones durante la vigencia del contrato, que es larga, dejando con posterioridad a la vigencia del mismo en plena libertad al dueño de la parcela para que pueda hacer lo que tenga por conveniente.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

No sé si el señor senador por la Capital ha solicitado alguna modificación o supresión de este artículo 16...

Sr. Palacios. — Pedía la substitución por la proposición que he hecho.

Sr. Arrieta. — Bien, sin entrar a considerar en este momento la proposición que hace el señor senador por la Capital, —la cual creo que debía reservarse para ser discutida y votada en el momento en que se considere el artículo 33,— pienso que el artículo 16 debe aprobarse tal como está, porque aun cuando se estableciera que no pueda enajenarse el predio sin previa autorización del consejo, ocurrirá que, por fallecimiento del propietario de un predio, el terreno se subdivide inconvenientemente o sea heredado por un vecino, lo que implicaría aumentar la extensión de su propiedad. De manera

que por el simple fallecimiento de un propietario podría ocurrir cualquiera de los dos casos que prevé la ley en este artículo 16: o que las tierras se refundan en un nuevo propietario o que se subdividan en extensiones inconvenientes.

Por estas razones, creo que debemos votar este artículo tal como está, sin perjuicio, como digo, de considerar y votar la proposición del señor senador por la Capital al tratarse el artículo 33.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

CAPÍTULO V

Inmuebles de provincia para la colonización

Artículo 17. — Para los planes de constitución de pequeñas propiedades rurales serán preferidos los inmuebles sitios en las provincias que dicten leyes que dispongan:

- Exención hasta por cinco años del impuesto territorial a los inmuebles que se incorporen al régimen de la presente ley, sea por compra o convenio con instituciones oficiales, mientras no sean arrendados o vendidos a los agricultores;
- Exención de la contribución territorial por un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la escrituración a los agricultores que instale el consejo;
- Exención de todos los impuestos, inclusive el sellado a las actividades del consejo;
- Instalación de escuelas, justicia de paz, policía, conservación y reparación de caminos para el transporte de los productos a estación o puerto.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

El señor senador por Entre Ríos ha propuesto una nueva redacción del artículo 17 sobre la cual no deseo ni estoy en condiciones de tratarla sobre tablas. Pediría, en consecuencia, que la consideración de este artículo se aplase para la próxima sesión y continuemos con el siguiente, o sea el 18.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se lee:

CAPÍTULO VI

Inmuebles de los bancos e instituciones oficiales para la colonización

Artículo 18. — Si los considera aptos, para los fines de la presente ley, el Consejo Agrario Nacional proce-

derá a colonizar con preferencia, los inmuebles adjudicados a los bancos oficiales, Instituto Movilizador, ministerios, o cualquier otra repartición pública nacional.

A este objeto podrá adquirirlas en las condiciones de precio y de plazos para el pago, que estipulen con dichas instituciones, o convenir con éstas el traspaso de los mismos a su favor, en cualquier otra forma.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Para conciliar exactamente el artículo con la nueva redacción que ha propuesto el señor senador por Jujuy, para uno anterior, solicito que se agregue a continuación de la palabra «preferencia», las siguientes: «juntamente con las tierras fiscales.»

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 19. — Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al Consejo Agrario Nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas, siempre que le sea garantizado el precio que convenga, que no podrá, en ningún caso, ser inferior al que resulte de la aplicación de las normas del artículo 20.

—Sin observación, se aprueba.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Voy a proponer que se agregue a este artículo la proposición que hice referente a las tierras de las provincias y municipalidades, pues me parece que es conveniente aclarar su sentido en forma precisa. Voy a desistir del resto del artículo, porque tiene mucha oposición.

Sr. Arrieta. — ¿A cuál artículo se refiere?

Sr. Laurencena. — Lo pasé a Secretaría. El objeto de la proposición es éste: a las provincias y municipalidades habrá que pagarles indudablemente las tierras. Entonces, para evitar que en esos casos el consejo tenga que pagarles en dinero o en títulos, propongo que las reciba y, al someterlas al régimen de colonización, que las provincias y municipalidades reciban lo que ingrese por concepto de venta de esas tierras, con sus intereses y amortización.

Sr. Landaburu. — ¿Qué forma tendría, preceptivamente, el agregado propuesto por el señor senador por Entre Ríos?

Sr. Secretario (Figuerola). — (*Leyendo*): «Las provincias y municipalidades que entreguen al consejo las tierras de su propiedad podrán estipular en los contratos condiciones especiales

de colonización, pero el consejo no podrá, en ningún caso, comprometerse a hacerles un pago anual mayor que el ingreso que produzca la amortización e intereses de la misma tierra.»

Sr. Laurencena. — Quiere decir que, con respecto a las condiciones de la colonización, podrán estipularse por las provincias condiciones especiales, y, con respecto al pago, nunca podrá ser con la obligación de una cuota mayor que la que produzca la misma tierra.

Sr. Landaburu. — Sobre todo, tratándose de un acto convencional y voluntario, no hay inconveniente en aceptarlo en esa forma.

Sr. Arrieta. — ¿Dónde irá el agregado?

Sr. Landaburu. — Al final del artículo 19, donde habla de la forma como se transfieren las propiedades de las instituciones autónomas y de los bancos oficiales.

Sr. Arrieta. — Entonces, la Secretaría tendrá que modificar el título del capítulo VI, extendiéndolo a las tierras fiscales y también a las del dominio privado de las provincias y municipalidades.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

CAPÍTULO VII

Adquisición de inmuebles

—Se lee:

Artículo 20. — Previa inspección efectuada por no menos de dos técnicos de su personal, para la adquisición de inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales:

- a) Toda adquisición será resuelta por el voto de cuatro de sus miembros, por lo menos;
- b) La tasación del inmueble se hará de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 14.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

CAPÍTULO VIII

Subdivisión y mejoras

Artículo 21. — Adquirido un inmueble, el consejo procederá a subdividirlo en lotes, cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno y deberá calcularse en cada región teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia, y con capacidad productiva suficiente para cubrir sus principales necesidades de vida y acumular un capital que le permita mejorar sus condiciones sociales y económicas y la técnica de su explotación.

Queda autorizado el consejo para vender en remate público las fracciones sobrantes de una subdivisión que no resulten aptas para los fines de esta ley, o que por sus mejoras costosas o inútiles no permitan una pequeña explotación.

—Sin observación, se aprueba

—Se lee:

Artículo 22. — El consejo introducirá mejoras que estime económicamente necesarias en los predios a ofrecerse a los agricultores. Reservará las parcelas para las explotaciones de orientación técnica y experimental a que se refiere el artículo 34.

Reservará el terreno destinado a escuela del tipo fijado en ese artículo y convendrá con el Consejo Nacional de Educación o autoridades provinciales su instalación, donando el terreno a quien corresponda.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra para una aclaración.

Entiendo que la Secretaría ha leído en el segundo párrafo la frase: «del tipo fijado en ese artículo». Es una modificación a la sanción de Diputados, que responde a una sugestión del Consejo Nacional de Educación, que nos ha traído el vocal, señor Alemandri. Antes decía: «siempre que no existiera una a menos de cinco kilómetros». Se ha entendido que puede existir una de condiciones precarias, que no llene los fines que debe tener en esta ley. Entonces se ha preferido fijar en esta forma el pensamiento: «del tipo fijado en ese artículo».

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 23. — El consejo procurará que los caminos se mantengan en buen estado, a cuyo efecto solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, gobiernos de provincia o municipalidades.

El Ministerio de Agricultura facilitará sin cargo al consejo, todos los elementos necesarios para el arbolado y embellecimiento de caminos y predios.

—Sin observación, se aprueba

—Se lee:

CAPÍTULO IX

Venta de predios

Artículo 24. — El consejo estudiará tipos económicos de viviendas y podrá, previo acuerdo con el comprador, construir la casa habitación, cuyo importe, que se abonará en iguales condiciones que el precio de la tierra, no excederá del 10 % del valor de la misma. Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Pido que después de la palabra «habitación» se agregue «u otras mejoras», porque la casa no bastará en muchos casos para la habitación del inmueble; es necesario pequeñas mejoras, como cercos y acequias, que son necesarias y que no exceden del porcentaje.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo 24 con el agregado propuesto por el señor senador por Salta y aceptado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 25. — El consejo podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado siempre que no sea propietario de inmuebles aptos para la agricultura de igual o mayor extensión que el que pretenda adquirir, y que reúna los demás requisitos prescritos por esta ley.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 26. — La venta de los predios se hará previa justificación de la capacidad civil y de la aptitud profesional y personal de los agricultores. La capacidad civil para todos los efectos de esta ley, se adquiere a los veinte años de edad. La aptitud profesional se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un periodo no menor de tres años. La aptitud personal no regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

Artículo 27. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los que:

- Tengan familia apta para colaborar en el trabajo del predio, entendiéndose por familia la esposa, los parientes de la línea directa y los colaterales de segundo grado que vivan con el agricultor;
- Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia de cinco años, y estén domiciliados en la región;
- Sean egresados de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias, o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado,

siempre que cultiven la tierra directamente, y aunque no reúnan las condiciones especificadas en los incisos anteriores.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

Artículo 28. — El consejo adjudicará, dentro de las colonias a que se refiere el artículo 34, no menos del 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión, a los agricultores a que alude el artículo anterior y podrá reservar la extensión restante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 7º.

El Consejo Agrario determinará el porcentaje de colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.

Sr. Serrey. — Pido la palabra.

Propongo una pequeña modificación a este artículo, que consiste en reducir al 65 % la primera parte, dedicando un 10 % a los argentinos nativos, que no habiendo sido agricultores desearan serlo y sean hábiles para convertirse en tales. Con esto me propongo resolver una cuestión seria, como es la de la superpoblación de las ciudades, en las cuales hay muchos elementos capacitados para el trabajo y que no tienen medios de vida; tal vez lo encuentren en el campo, dedicándose a la agricultura. Esta superpoblación trae aparejado un grave problema, como es el que presenta la ciudad de Buenos Aires. Si pudiéramos facilitar a una parte de los elementos que la habitan que se dediquen a las tareas del campo o de labriego, habríamos realizado una importante obra de progreso.

Sr. Landaburu. — La comisión ha estudiado ese agregado con modificaciones propuestas por el señor senador por Salta, y cree que no debe aceptarlo. Una de las bases fundamentales de esta ley es la selección de los agricultores, y me parece que el señor senador por Salta se contradice cuando, por una parte nos propone que se deje el 10 % para los agricultores que no hayan probado capacidad profesional durante tres años, como dice la ley, y, por otra parte, habla de personas «aptas». La aptitud hay que probarla con un examen de competencia, con un diploma o con el ejercicio de las tareas agrícolas durante un lapso. Yo creo que expondríamos a la ley, en esa parte, a un fracaso llevando a agricultores improvisados.

Comprendo el propósito del señor senador por Salta, pero no creo que deba cumplirse con ese criterio.

Sr. Serrey. — No insisto, pero creo que se podría resolver un problema actual.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el artículo leído.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 29. — El saldo de precio de venta será abonado:

a) Con una amortización anual acumulativa del $\frac{1}{2}$ % e intereses del $2\frac{1}{2}$ %, hasta reducirlo al 50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de explotación.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

En la discusión en general me referí a la conveniencia de que fuera aceptado en ciertos casos, el pago del precio con un porcentaje de la producción de la tierra.

No voy a decir que el señor miembro informante me manifestó que aceptaba esta proposición, por temor de que haya cambiado de opinión...

Sr. Landaburu. — Eso me servirá de lección en el futuro para no contestarle nunca sobre tablas.

Sr. Palacios. — Con la colaboración tan eficaz e ilustrada del señor senador Laurencena, voy a presentar un agregado al artículo 29 que dice: «El consejo podrá, cuando la naturaleza de las explotaciones lo permita, establecer el pago de la amortización e interés en forma de un porcentaje de la producción calculado en forma que represente un valor equivalente al establecido para el pago en dinero».

Sr. Presidente (Patrón Costas). — ¿Sería un nuevo inciso, señor senador?

Sr. Palacios. — Sería un agregado al artículo 29.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

La comisión va a aceptar el agregado propuesto por el señor senador por la Capital con una amplitud mucho mayor todavía que la que él expresa en la redacción que ha entregado a Secretaría; pero creo que no corresponde incluirlo como un agregado al artículo 29, sino como una disposición de carácter general que comprenda, no sólo las cuotas del precio de venta a que este precepto se refiera, sino al

arrendamiento y aun al fondo de ahorro, a que se refieren otros artículos.

Sr. Palacios. — Precio de venta o arrendamiento.

Sr. Landaburu. — De manera que con posterioridad a esos artículos, la comisión va a proponer un artículo nuevo, que autorice al Consejo Agrario, en determinadas condiciones, recibir en pago los productos de la tierra.

Sr. Palacios. — Mi proposición ha sido estudiada detenidamente y aparece también en la colaboración entregada al señor miembro informante por mi discípulo, el abogado Rabullida.

Sr. Landaburu. — Yo la he recibido del señor senador por la Capital y me siento muy complacido de aceptarla en la forma que fundaré más adelante, porque entiendo que el señor senador está conforme en que se postergue su consideración para hacerlo en otro capítulo posterior que comprenda otras erogaciones del agricultor.

Sr. Palacios. — Si la comisión acepta mi agregado, puede colocarlo donde desee.

Sr. Landaburu. — Si el Honorable Senado me lo permite, yo indicaré la oportunidad en que este agregado debe ser incluido.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso b) del artículo 29, tal cual figura en el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

- c) La deuda será reducida en un 3 % de su valor inicial por cada hijo legítimo del comprador, que naciera en la propiedad al cumplir dos años de edad.

Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra para preguntarle al señor miembro informante de la comisión la razón que se ha tenido para acordar un beneficio al colono por cada hijo legítimo que nazca en la propiedad, solamente cuando éste haya cumplido dos años de edad.

Me parece lógico que la reducción de la deuda debería operarse con el nacimiento del hijo del colono en su propiedad. No sé cuál es la razón que ha movido a proponer este plazo de dos años para tener derecho al beneficio.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Sin embargo, la razón es evidente. La comisión ha sido más generosa que la sanción de la

Cámara de Diputados a este respecto, suprimiendo la exigencia final de aquélla, que requería que esa disminución en el precio se efectuara después del segundo hijo vivo nacido antes o después de instalado el colono en la tierra.

El plazo de dos años tiene como explicación que a los dos años, se prueba, en cierta medida, que el agricultor va a quedar radicado en la tierra y que su propósito, al comprarla, entraña un acto serio; y sólo a partir de entonces merece este estímulo y premio que le concede la ley, rebajándole el precio de compra en relación con el número de hijos que hubiera tenido en la tierra.

Sr. Arrieta. — Deploro, señor presidente, que el señor miembro informante no me haya convencido. Si lo que el señor senador dice se aceptara, ocurriría que en el segundo o tercer hijo, cuando ya el colono ha probado su capacidad para colonizar, tendría igualmente que esperar cada vez, a que los nuevos hijos lleguen a los dos años de edad, lo cual invalida su argumento. También puede ocurrir que el primer hijo nazca varios años después que el colono se hizo cargo de la propiedad, es decir, cuando ya ha acreditado suficientemente su capacidad para colonizar la tierra. De manera que en este caso, el argumento no sería válido ni siquiera para el primer hijo.

Creo que en materia de esta naturaleza, no debemos ser mezquinos ni estar regateando uno o dos años para acreditar a la familia colonizadora un beneficio, por cierto muy pequeño, por cada hijo que tenga. De modo que me resuelvo a proponer concretamente que se suprima la condición de que el hijo deba llegar a los dos años de edad para recién concederle al colono la reducción de su deuda.

Sr. Laurencena. — Desearía saber si la comisión ha hecho un cálculo aproximado de lo que este beneficio representa para el agricultor.

Sr. Landaburu. — Declaro lealmente, señor senador, que la comisión no ha hecho ese cálculo especial.

Sr. Laurencena. — Yo lo he hecho y, según él, resulta que para el comprador de una chacra de \$ 10.000 m/n., apenas representa esta reducción \$ 9 m/n. al año. (*Risas.*)

Como digo, esa cifra debe ser más o menos el valor del premio que ha de recibir el colono y resulta realmente un beneficio un tanto ridículo.

Sr. Landaburu. — ¿De lo que deduce también el señor senador que debe suprimirse la exigencia de los dos años?

Bien, señor senador. La comisión acepta.

Sr. Arrieta. — Y aun es posible que el beneficio sea menor que lo calculado por el señor senador por Entre Ríos. Pero siempre es un beneficio.

Sr. Laurencena. — Cada \$ 1.000 m/n., son 90 centavos que se rebaja por año.

Sr. Palacios. — Podría aumentarse el porcentaje.

Sr. Arrieta. — Que se aumente.

Sr. Landaburu. — La comisión acepta la supresión del plazo de dos años.

Sr. Palacios. — ¿Y por qué no acepta que se aumente el porcentaje?

Sr. Laurencena. — Se trata de un premio.

Sr. Palacios. — Si la cifra es insignificante, que se aumente.

Sr. Landaburu. — Pongamos 5 por ciento.

Sr. Palacios. — El 15 ó el 20 por ciento.

Sr. Landaburu. — No, señor senador, porque entonces, cuando el colono tenga 4 ó 5 hijos no tendrá que pagar nada.

Sr. Palacios. — Muy bien; propongo el 10 por ciento.

Sr. Landaburu. — La comisión aceptaría, señor presidente, con el 5 %, y pido que se vote en esa forma.

Sr. Suárez Lago. — Con la supresión de los dos años.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Se va a votar el inciso c) con el 5 % y la supresión de los dos años.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Palacios. — ¿La comisión no había aceptado el aumento del porcentaje?

Sr. González Iramain. — Sí, señor senador, se votó con el 5 por ciento.

—Se lee:

Artículo 30. — Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

En este caso, la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco.

Si el banco no aceptara la transferencia del crédito, el Consejo Agrario Nacional podrá optar entre otorgar la escritura de venta reservándose hipoteca en garantía del saldo, o diferir la escrituración hasta que sea pagado todo el precio.

—Sin observación, se aprueba.

—Se lee:

Artículo 31. — Los agricultores que reúnan los requisitos exigidos y que no estén en condiciones de abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra, hasta por el término de cinco años, a un precio igual al 3 % del precio de venta.

El consejo queda facultado para declarar la caducidad de dichos contratos, cuando en cualquier momento de su vigencia comprobara capacidad del arrendatario para convertirse en propietario, de acuerdo a las exigencias de esta ley.

Podrá también el consejo ampliar prudencialmente el término del arriendo cuando, por circunstancias especiales, dentro del mismo, el locatario no hubiera podido cumplir con los requisitos prescriptos para convertirse en propietario.

—Sin observación, se aprueba.

Sr. Palacios. — Pido la palabra.

Me sería muy agradable que el señor miembro informante aceptara un artículo que dijera así: «El consejo queda facultado para entregar la tierra fiscal en concesiones vitalicias, de acuerdo a las normas que dictará oportunamente. Las concesiones serán intransferibles, de canon movable, sin admitir subarrendamiento. Los herederos podrán continuar los arriendos con preferencia respecto a terceros».

Se trata, simplemente, de facultar al consejo para que acepte, en la oportunidad que lo crea conveniente, esta forma de colonización. No hay ninguna expresión autoritativa.

Hace pocos momentos el señor miembro informante, refiriéndose a un artículo del despacho, decía: simplemente facultativa». No hay, pues, motivo alguno para que el consejo se vea privado de cualquier medio de colonización, y este que propongo para la tierra fiscal, puede ser de gran utilidad.

El señor senador Laurencena nos ha dicho que lo más urgente es colonizar la tierra del Estado, y en eso estamos todos de acuerdo.

Hay grandes extensiones de tierra que pueden entregarse en concesiones vitalicias.

El señor miembro informante nos citó hace pocos días, como una autoridad en esta materia, al señor ingeniero Marotta, decano de la Facultad de Agronomía y es precisamente el ingeniero Marotta, quien en su libro —el mismo citado por el señor miembro informante— nos refiere que en los Estados Unidos los censos decenales acusan una disminución en el número de propietarios que allá están en la misma proporción más o menos que entre nosotros, los arrendatarios. La causa está en el excesivo valor de las tierras, por una parte, o por la otra, en el deseo de los agricultores

de conservar su dinero para emplearlo como capital de explotación. Por eso, yo considero, dice Marotta, que cuando la tierra vale mucho, no es factible realizar una colonización popular en vasta escala. Parcialmente, entonces, nada obsta a que el Estado, el Banco de la Nación, o el Banco Hipotecario, conserven el dominio de sus tierras, otorgando solamente el uso.

Sería cuestión de adoptar un sistema de arrendamiento en el que se suprimirían todos los inconvenientes que derivan de él, como en la ley de enfiteusis, termina el decano de la Facultad de Agronomía.

Hago notar a los señores senadores, porque en alguna oportunidad he oído decir que este sistema es anticuado, que está en desuso, que no es así, felizmente.

Nuestro gran Rivadavia dictó la enfiteusis, que yo propongo, con apreciables modificaciones. Rivadavia fué el autor del primer sistema agrario en nuestro país, respecto del cual ha hecho elogios entusiastas Nicolás Avellaneda en su famoso libro, citado por el señor miembro informante. Rivadavia legislaba con proyecciones al porvenir, a tal extremo que la enfiteusis, desacreditada por las leyes que vinieron con la tiranía, ha inspirado la reforma agraria en Nueva Zelandia y Australia, que la tienen en vigencia. En forma facultativa queda bien en nuestra ley.

Si la ley dice que se dará la tierra en propiedad, y en arrendamiento, nada, absolutamente nada, impide que quede facultado el Consejo Agrario para que en caso que lo creyere conveniente, haga las concesiones vitalicias en la forma que reglamente el mismo.

Estoy seguro que el señor miembro informante ha de aceptar esta disposición facultativa.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

¿El artículo 32 se votó ya?

Sr. Suárez Lago. — El 32, no.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Había pedido la palabra con anterioridad el señor miembro informante.

Sr. Arrieta. — Yo la he pedido para hacer una moción de orden.

Entiendo que el artículo 32 no se votó. ¿La proposición del señor senador por la Capital, corresponde ser tratada después del artículo 32?

Sr. Palacios. — Después del artículo 31, porque habla de la venta. Por otra parte, el lugar o colocación del artículo no tiene mayor importancia.

Sr. Arrieta. — Había interpretado que el señor senador proponía su nuevo artículo después del 32. Como se trata de un asunto que merece una consideración especial, y como la Cámara está trabajando hace varias horas sin descanso, iba a pedir que se pasara a un breve cuarto intermedio, moción que formulo en este momento.

Sr. Palacios. — Permítame el señor senador.

Si se tratara de una disposición autoritativa, yo creo que el señor senador tendría razón, pero tratándose, simplemente, de consignar una facultad a un consejo técnico elegido o designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado, es claro que no puede haber ninguna dificultad.

Lo que yo propongo como sistema de colonización, subsidiariamente, es un arriendo más amplio, con todas las ventajas que tiene, porque da la estabilidad, pareciéndose mucho a la propiedad. Es facultativo, señor senador. ¿Por qué vamos a privar al Consejo Agrario de una facultad tan interesante?

Sr. Arrieta. — Quizá no me ha interpretado bien el señor senador, o no me he expresado con propiedad.

De ninguna manera me he referido a la proposición del señor senador. Sólo expresé que me parecía que la Cámara vería con agrado en este momento un breve descanso. Por ello formulé moción de pasar a cuarto intermedio.

Sr. Palacios. — Pero podríamos pasar a cuarto intermedio después de votar esta proposición mía, en favor o en contra.

Sr. Arrieta. — Desgraciadamente, creo que por falta de quórum ya no podremos votar ni la moción de cuarto intermedio.

¿Hay número en la casa?

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Sí, señor senador.

—Después de unos momentos de espera, dice el

Sr. Presidente (Patrón Costas). — No hay número en la casa. Queda levantada la sesión.

—Era la hora 19 y 15.